2. Se sugirió que si el perfeccionamiento de las normas que rigen los conflictos de leyes era una labor que, en la fase actual, podía ser práctica y significativa, la armonización del régimen jurídico aplicable a las transferencias de crédito era una meta más importante.

Se opinaba que el problema de los conflictos de leyes sería de menor relevancia si un gran número de los países interesados en las transferencias de crédito internacionales fueran a promulgar la Ley Modelo. Lo mismo sucedería si el régimen de la Ley Modelo fuera a ser aplicable a la transferencia, por existir una remisión contractual expresa de las partes; cabría incluso prever que la Ley Modelo adquiriera la fuerza jurídica de un "uso comercial", al igual que había sucedido con las reglas relativas a las cartas de crédito de la CCI.

3. Ahora bien, no era de prever que todos los países vayan a promulgar las disposiciones de la Ley Modelo en su totalidad, por lo que será necesario disponer de una regla sencilla y decisiva que permita resolver los conflictos de leyes a fin de que las partes puedan hacerse una idea de cuál será el impacto de la Ley Modelo sobre la transferencia. El artículo 18 de la Ley Modelo no indica, sin embargo, claramente la medida en que será aplicable la ley seleccionada por las partes a la responsabilidad por daños incurrida por un tercero que no sea parte en una relación de expedidor-receptor. Se sugirió por ello que se suprimiera el artículo 18 de no enmendarse considerablemente su texto actual.

Se opinó que debía preservarse en todo caso la libertad de las partes en la transferencia de crédito para seleccionar el régimen jurídico aplicable a sus operaciones.

4. Se sugirió que la expresión "ley del Estado designado por las partes" se prestaba a interpretaciones erróneas. Aun cuando se entendiera que esa expresión se refería al trámite completo de la transferencia, podría haber divergencias entre el régimen aplicable, por ejemplo, al cálculo de los intereses debidos por no haberse completado la transferencia (artículo 13) y las reglas técnicas relativas al pago (modalidades de pago). El régimen aplicable a los intereses habrá de ser el de la ley seleccionada por las partes, pero no habría inconveniente en que el régimen aplicable a las modalidades de pago quedara al arbitrio del derecho interno del país donde estuviera domiciliado el banco

intermediario. Se diría, por ello, que será necesario examinar más a fondo este asunto e introducir alguna enmienda clarificadora.

a) *Comité de Basilea sobre reglas y prácticas de supervisión bancaria*

22 de mayo de 1991

Estimado Sr. Bergsten,

Me refiero a su carta dirigida al Sr. Lamfalussy de 8 de febrero de 1991 relativa al proyecto de Ley Modelo de la CNUDMI sobre transferencias internacionales de crédito (A/CN.9/344). Como indicó el Sr. Lamfalussy en su carta de 13 de marzo de 1991, en mi calidad de Secretario del Comité de Basilea sobre reglas y prácticas de supervisión bancaria, he señalado el artículo 13 a la atención de las instituciones que son miembros del Comité y me he referido expresamente a la cuestión de si cabe prever que se exija que el banco intermediario mantenga una reserva de capital contra el riesgo de que haya de restituir los fondos al iniciador de una operación, sin que el banco haya recibido la suma correspondiente que le era debida.

Los miembros del Comité no estiman que el acuerdo de 1988 relativo a la reserva de capital obligue a los bancos que se encuentren en esta situación a incluir este riesgo, a título de responsabilidad contingente, en el cálculo ponderado de esa reserva. No obstante esta opinión de la Ley Modelo, deseo añadir que cierto es que el acuerdo de 1988 reconoce que existen algunos riesgos a los que no es aplicable, pero también lo es que algunos países imponen requisitos adicionales propios. La práctica bancaria de algunos de los países miembros difiere claramente de la práctica prevista en el artículo 13 por lo que tal vez sea preciso que lo vuelvan a examinar algunos supervisores y tal vez el propio Comité si es que ese riesgo se materializa.

Confío en que esta carta contribuya a aclarar la cuestión suscitada por el Grupo de Trabajo, pero no deje de avisarme si desea que le aclare algún otro punto.

(P. C. Hayward, Secretario)

C. Informe del Grupo de Trabajo sobre Pagos Internacionales acerca de la labor realizada en su 21.º período de sesiones (Nueva York, 9 a 20 de julio de 1990) (A/CN.9/341) [Original: inglés]

ÍNDICE

	Párrafos
INTRODUCCIÓN	1-9
I. EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE DISPOSICIÓN DE LA LEY MODELO SOBRE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE CRÉDITO	10-131
Artículo 14	11-23
Artículo 15	24-49
Artículo 16	50-52
Revisión del texto: observaciones generales	53-56
Artículo 1	57-65
Artículo 2	66-84
Artículo 3	85
Artículo 4	86-103
Artículo 12	104-131
II. LABOR FUTURA	132

ANEXO	Proyecto de Ley Modelo sobre transferencias internacionales de crédito con las modificaciones introducidas en el 20.º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Pagos Internacionales	Página 166
-------	--	---------------

INTRODUCCIÓN

1. En su 19.º período de sesiones, celebrado en 1986, la Comisión decidió iniciar la preparación de normas modelo sobre transferencias electrónicas de fondos y encomendar esa tarea al Grupo de Trabajo sobre Títulos Negociables Internacionales, al que volvió a denominar Grupo de Trabajo sobre Pagos Internacionales¹.

2. El Grupo de Trabajo emprendió la tarea en su 16.º período de sesiones, en el que examinó una serie de problemas jurídicos que se indicaban en una nota de la Secretaría (A/CN.9/WG.IV/WP.35). El Grupo pidió a la Secretaría que preparara proyectos de disposición sobre la base de los debates celebrados durante su 16.º período de sesiones para examinarlos en su 17.º período de sesiones (A/CN.9/297, párr. 98). En su 17.º período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó los proyectos de disposición preparados por la Secretaría. Al finalizar sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara un proyecto revisado de normas modelo (A/CN.9/317, párr. 10). En su 18.º período de sesiones, el Grupo de Trabajo inició su examen del proyecto revisado de normas modelo, al que dio el nuevo nombre de proyecto de Ley Modelo sobre transferencias internacionales de crédito (A/CN.9/318, párrs. 10 a 19). En sus períodos de sesiones 19.º y 20.º continuó su examen del proyecto de Ley Modelo (véanse A/CN.9/328 y 329).

3. El Grupo de Trabajo celebró su 21.º período de sesiones en Nueva York del 9 al 20 de julio de 1990. El Grupo estuvo integrado por todos los Estados miembros de la Comisión. Asistieron al período de sesiones representantes de los siguientes Estados miembros: Alemania, República Federal de, Bulgaria, Camerún, Canadá, Costa Rica, Checoslovaquia, Chile, China, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos de América, Francia, India, Iraq, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Japón, Kenya, Marruecos, México, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay y Yugoslavia.

4. Asistieron también al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Arabia Saudita, Australia, Burkina Faso, Colombia, Ecuador, Filipinas, Finlandia, Indonesia, Israel, Jordania, Liberia, Pakistán, Polonia, República de Corea, República Unida de Tanzania, Rwanda, Suecia, Suiza, Tailandia, Uganda, Vanuatu, Venezuela y Yemen.

5. Asistieron al período de sesiones observadores de las siguientes organizaciones internacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco de Pagos Internacionales, Conferencia

de La Haya sobre el Derecho Internacional Privado, Federación Bancaria de la Comunidad Europea, Cámara Internacional de Comercio, Federación Latinoamericana de Bancos y Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

6. El Grupo de Trabajo eligió a los siguientes miembros de la Mesa:

Presidente: Sr. José María Abascal Zamora (México)

Relator: Sr. Bradley Crawford (Canadá)

7. El Grupo de Trabajo tuvo ante sí los siguientes documentos:

a) Programa provisional (A/CN.9/WG.IV/WP.45);

b) Transferencias internacionales de crédito: observaciones al proyecto de Ley Modelo sobre transferencias internacionales de crédito (A/CN.9/WG.IV/WP.46 y Corr.1);

c) Transferencias internacionales de crédito: propuesta de los Estados Unidos de América (A/CN.9/WG.IV/WP.47).

8. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:

1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa.

3. Preparación de la Ley Modelo sobre transferencias internacionales de crédito.

4. Otros asuntos.

5. Aprobación del informe.

9. En el período de sesiones se facilitaron los documentos siguientes:

a) Informe del Grupo de Trabajo sobre Pagos Internacionales sobre la labor realizada en su 16.º período de sesiones (A/CN.9/297);

b) Informe del Grupo de Trabajo sobre Pagos Internacionales sobre la labor realizada en su 17.º período de sesiones (A/CN.9/317);

c) Informe del Grupo de Trabajo sobre Pagos Internacionales sobre la labor realizada en su 18.º período de sesiones (A/CN.9/318);

d) Informe del Grupo de Trabajo sobre Pagos Internacionales sobre la labor realizada en su 19.º período de sesiones (A/CN.9/328);

e) Informe del Grupo de Trabajo sobre Pagos Internacionales sobre la labor realizada en su 20.º período de sesiones (A/CN.9/329);

f) Transferencias internacionales de crédito: principales problemas en relación con la Ley Modelo sobre transferencias internacionales de crédito (A/CN.9/WG.IV/WP.42).

¹Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 17 (A/41/17), párr. 230.

I. EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE DISPOSICIÓN DE LA LEY MODELO SOBRE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE CRÉDITO

10. El texto del proyecto de Ley Modelo que tuvo ante sí el Grupo de Trabajo era el que figuraba en el informe del Grupo de Trabajo sobre el 20.º período de sesiones (A/CN.9/329, anexo) y que se reprodujo incluyendo observaciones en el documento A/CN.9/WG.IV/WP.46 y Corr.1.

Artículo 14

11. El Grupo de Trabajo recordó que en su 20.º período de sesiones hubo un breve debate general acerca del artículo 14 con el objeto de sentar las bases para un examen más detenido del artículo en el actual período de sesiones (A/CN.9/329, párrs. 189 a 192).

Párrafo 1

12. Aunque se expresó alguna oposición, el Grupo de Trabajo decidió suprimir el párrafo 1. Se indicó que, si bien muchos sistemas jurídicos ya reconocían las transferencias de crédito como un método aceptable para hacer los pagos, competía al Estado decidir si podía cumplirse una obligación pecuniaria con una transferencia de crédito. Se observó además que podría resultar contrario a la política monetaria de algunos países considerar que el crédito cargado a la cuenta de un banco tenía el mismo significado jurídico que el dinero emitido por un banco central.

Párrafo 2

13. Según una opinión debía suprimirse el párrafo 2. En apoyo de esa opinión se dijo que el texto actual presumía que la función de una transferencia de crédito era cumplir una obligación aunque una transferencia de crédito podría de hecho tener muchas otras funciones, como cambiar fondos entre cuentas de la misma persona. Se indicó además que no debía entenderse que había cumplimiento con una transferencia de crédito si se había estipulado el pago por otro medio entre las partes o si la transferencia había sido acreditada a otra cuenta.

14. Se indicó que la Ley Modelo debía tratar una transferencia de crédito como una operación abstracta, independientemente del propósito perseguido con la transferencia o del efecto jurídico de la transferencia sobre la transacción subyacente. Según esa opinión la Ley Modelo debía contener una disposición que indicara el momento en que se debía considerar que se había completado una transferencia de crédito. Si la transferencia tenía por objeto el cumplimiento de una obligación, otras normas del derecho aplicable a la obligación determinarían si la obligación se había cumplido con la transferencia, el momento en que se hubiera cumplido la obligación y la medida en que se hubiera cumplido. Quienes sostenían esa opinión sugirieron además que, a fin de ajustarse a la definición de "transferencia de crédito" del artículo 2, debía considerarse que se había completado la transferencia en el momento en que los fondos se ponían a disposición del beneficiario y no con la aceptación de la transferencia por el banco del beneficiario.

15. Según otra opinión, aunque la Ley Modelo no contenía una disposición en el sentido de que la transferencia de crédito constituiría el cumplimiento de una obligación, la Ley Modelo podría incluir una disposición que rigiera algunos aspectos del cumplimiento cuando las partes hubieran convenido en que se podría cumplir la obligación con una transferencia de crédito. En particular, la Ley Modelo podría indicar el momento en que tendría lugar el cumplimiento. Sin embargo, se indicó que una disposición de ese tipo debía indicar que el alcance del cumplimiento derivado de la transferencia de crédito no sería superior al pago hecho en dinero efectivo. En aplicación de ese punto de vista se sugirió el texto siguiente:

"Si la finalidad de la transferencia era que el iniciador cumpliera una obligación ante el beneficiario que pueda cumplirse mediante una transferencia a la cuenta indicada por el iniciador, se considerará satisfecha la obligación en el momento en que el banco del beneficiario acepte la orden de pago y en la medida en que esa obligación sería satisfecha por el pago de la misma suma en efectivo."

16. Se indicó además que las dos posiciones no eran incompatibles en lo fundamental y que la Ley Modelo podría incluir tanto la disposición enunciada anteriormente como una disposición acerca del momento en que se completaría la transferencia de crédito, que podría tener la redacción siguiente:

"Se completará una transferencia de crédito en el momento en que el banco del beneficiario acepte la orden de pago. Cuando se complete la transferencia de crédito el banco del beneficiario quedará obligado respecto del beneficiario por la suma de la orden de pago aceptada por el banco."

17. El Grupo de Trabajo decidió aprobar las dos disposiciones en la forma en que se habían sugerido. Señaló que su decisión comprendía tanto una decisión en cuanto a las materias que debían incluirse en la Ley Modelo como una decisión en cuanto al momento en que se completaba la transferencia de crédito, con las consecuencias jurídicas consiguientes, en el sentido de que se completaba cuando el banco del beneficiario aceptaba la orden de pago que se le dirigía. El Grupo de Trabajo no excluyó la posibilidad de reconsiderar la cuestión de la aceptación de una orden de pago tal como figuraba en los artículos 5 y 7 teniendo en cuenta que la aceptación importaba el perfeccionamiento de la transferencia de crédito.

Párrafo 3

18. El Grupo de Trabajo observó que las sumas de dinero a que se refería el párrafo 3 eran relativamente reducidas, pero que las cuestiones jurídicas que planteaba eran importantes. Se señaló que pocas personas podían anticipar la cantidad que podría cobrarse por concepto de comisión para hacer una transferencia internacional de crédito y que había una falta de acuerdo o de comprensión en cuanto a quién debía pagar esa comisión o la forma en que debía cobrarse.

19. Aunque no se aprobó una sugerencia de que se suprimiera el párrafo, hubo acuerdo general en que el párrafo

no debía ocuparse del efecto sobre la transacción subyacente de las comisiones que el banco dedujera del monto de la transferencia.

20. El Grupo de Trabajo decidió que en el párrafo 3 debía indicarse que la transferencia de crédito quedaba completa y el banco del iniciador había cumplido su obligación respecto del iniciador aunque el monto de la orden de pago aceptada por el banco del beneficiario fuera inferior al monto de la orden de pago dada por el iniciador porque los diversos bancos de la cadena de transferencia hubieran deducido las comisiones. Decidió además que en el párrafo 3 se dispusiera que el hecho de que se completara la transferencia no menoscababa derecho alguno que el beneficiario tuviera con arreglo a otras normas jurídicas aplicables para recuperar el saldo del monto inicial de la transferencia del iniciador, pero que el párrafo no debía tener por objeto determinar si el iniciador o el beneficiario era responsable en definitiva de pagar las comisiones de la transferencia. El Grupo de Trabajo pidió que un grupo de redacción que se crearía en el próximo período de sesiones del Grupo de Trabajo preparara un texto que pusiera en práctica esa decisión.

Párrafo 4

21. Se expresó la opinión de que el párrafo era demasiado detallado para una Ley Modelo. Se indicó además que la forma en que se había redactado el párrafo no se ajustaba a las disposiciones del párrafo 4 del artículo 4 en cuanto el párrafo 4 del artículo 14 otorgaría al banco el derecho a cargar la suma a la cuenta del expedidor cuando el banco recibiera la orden de pago, en tanto que el párrafo 4 del artículo 4 indicaba que, aunque la obligación del expedidor de pagar al banco receptor se creaba en el momento de la aceptación de la orden de pago, el pago efectivo no debía hacerse sino hasta la fecha de ejecución de la orden de pago.

22. El Grupo de Trabajo decidió suprimir el párrafo.

Título del artículo

23. El Grupo de Trabajo observó que debía cambiarse el título del artículo de manera de reflejar el contenido actual del artículo.

Artículo 15

Propuesta de párrafo 3

24. El Grupo de Trabajo examinó una propuesta de los Estados Unidos de América, que figuraba en el documento A/CN.9/WG.IV/WP.47, de que se añadiera, como nuevo párrafo 3, el siguiente:

“3. Los sistemas de transferencia de fondos pueden elegir la ley de un Estado particular para regir los derechos y obligaciones de todas las partes en una transferencia electrónica a alta velocidad. En caso de discrepancia entre una disposición de la ley del Estado elegido por el sistema de transferencia de fondos y una disposición de la presente Ley Modelo, prevalecerá lo dispuesto por la ley del Estado elegido por el sistema de transferencia de fondos.”

25. En apoyo de la propuesta, se alegó que, como los derechos y las obligaciones de una de las partes en una transferencia de crédito podían verse afectados por los actos de una parte en la transferencia situada en otro Estado, era importante que un solo juego de normas rigiera los derechos y las obligaciones de todas las partes en la transferencia. Se manifestó que la preocupación era especialmente importante respecto a las transferencias electrónicas a alta velocidad (término definido en otra parte de la propuesta escrita). A menos que hubiera un medio de que las partes eligieran la aplicación de una sola ley, como allí se proponía, las normas generales de elección de la ley aplicable que figuraban en el párrafo 1 del artículo 15 harían que se aplicaran las leyes de diferentes Estados a las diferentes etapas de la transferencia de crédito y no habría una sola ley que rigiera toda la transferencia de crédito.

26. Además, se manifestó que las necesidades de las transferencias electrónicas a alta velocidad debían tenerse en cuenta en la Ley Modelo más que en la actualidad. Se dijo que el texto actual reflejaba el derecho apropiado a medios más lentos de realizar las transferencias de crédito y que, en esa forma, obstaculizaría las transferencias a alta velocidad en lugar de facilitarlas. Había dos modos de que la Ley Modelo facilitara las transferencias a alta velocidad. Uno era volver a examinar todas las disposiciones sustantivas, y enmendarlas a fin de reflejar las necesidades de las transferencias electrónicas a alta velocidad, o añadir normas especiales que reflejaran esas necesidades. El otro, que se proponía en el documento, era permitir que los sistemas de transferencia de fondos eligieran la ley de un Estado que tuviera normas más apropiadas para esas transferencias que la ley que regía toda la transferencia, si una etapa de la transferencia pasaba por ese sistema.

27. Se señaló que la técnica sugerida ya había sido aplicada por el Sistema de Cámaras de Compensación de Pagos Interbancarios (CHIPS) en su nueva regla 3, y que se había elegido la ley del Estado de Nueva York para que rigiera toda la transferencia si una de sus etapas pasaba por el CHIPS. (La norma del CHIPS se reproducía en el documento A/CN.9/WG.IV/WP.47.)

28. En el Grupo de Trabajo, hubo acuerdo general en que en la Ley Modelo debían tenerse en cuenta las necesidades operatorias de las transferencias electrónicas de crédito a alta velocidad. Se manifestó que uno de los fines básicos de preparar la Ley Modelo era atender esas necesidades, y que debían revisarse las disposiciones sustantivas teniendo presentes esas preocupaciones. Se sugirió que debía haber suficiente amplitud para incluir en distintos artículos de la Ley Modelo reglas diferentes para las transferencias electrónicas y sobre papel.

29. Se expresó la opinión de que la propuesta podía constituir un medio razonable para que los bancos que realizaran transferencias internacionales de crédito convinieran en una sola ley que rigiera sus relaciones. No obstante, se manifestó que, aunque la propuesta podía ser razonable si se limitaba a las relaciones entre los bancos, era excesiva si pretendía imponer a los iniciadores y beneficiarios no bancarios una ley que era diferente a la que, en otro caso, hubiera sido aplicable a sus derechos y obligaciones y que ellos no habían elegido. La propuesta daría a

los sistemas de transferencia de fondos, que en la práctica significaba a los bancos, una libertad sin límites para elegir cualquier ley. Se expresó la preocupación de que los sistemas de transferencia de fondos pudieran elegir una ley que fuera especialmente favorable a los bancos y desfavorable a los iniciadores y beneficiarios no bancarios.

30. Se sugirió que la Ley Modelo se redactara de modo tal que, si bien se aplicara a toda la transferencia, se reconociera en ella que las normas de un sistema de transferencia de fondos regirían para los participantes en ese sistema con exclusión de la Ley Modelo en la medida en que las normas y la Ley Modelo no fueran compatibles.

31. Según otra opinión, la propuesta, en lugar de llevar a la unificación de las leyes que regían las transferencias internacionales de crédito, conduciría a su diversificación. Se señaló que una transferencia podía pasar por dos sistemas de transferencia de fondos y que los dos sistemas podían haber elegido leyes diferentes para que se aplicaran a toda la transferencia.

32. El Grupo de Trabajo no aprobó la propuesta, pero decidió que volvería a examinar las disposiciones del proyecto de Ley Modelo para asegurarse de que fueran compatibles con las necesidades de las transferencias de crédito a alta velocidad.

Párrafo 1

33. Se sugirió que se suprimiera el párrafo 1 del artículo 15, ya que sería preferible que la Ley Modelo no contuviera disposición alguna sobre los conflictos de leyes en las transferencias internacionales de crédito. Se afirmó que, teniendo en cuenta la variedad de las leyes nacionales sobre medios de pago y la complejidad de las cuestiones conexas, las disposiciones del párrafo 1 del proyecto de artículo 15 no tenían el grado de perfección que las haría aceptables para la mayoría de los Estados. Se señaló, por ejemplo, que no se había redactado disposición alguna respecto a los medios de que se valdrían las partes para expresar su elección de la ley aplicable. A ese respecto, se señaló a la atención el artículo 3 de la Convención de Roma sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales, en el que se decía:

“La elección debe ser expresada o demostrada con razonable certidumbre por los términos del contrato o las circunstancias del caso.”

También se manifestó que sería difícil que los Estados que eran partes en la Convención de Roma o en otros tratados bilaterales y multilaterales sobre conflictos de leyes en relación con obligaciones contractuales adoptaran las disposiciones sobre conflictos de leyes de la Ley Modelo.

34. Además, se sugirió que ninguna norma única sobre conflictos de leyes sería apropiada al mismo tiempo para las transferencias electrónicas a alta velocidad y para las transferencias de crédito mediante documentos escritos. Si se creía que había necesidad de normas específicas sobre conflictos de leyes en la esfera de las transferencias internacionales de crédito, debía considerarse la posibilidad de preparar una convención sobre esa materia. Ese procedimiento sería particularmente apropiado, ya que el Grupo de

Trabajo tenía experiencia sobre los aspectos sustantivos de las transferencias internacionales de crédito, pero no sobre las complejas cuestiones de los conflictos de leyes.

35. En contra de la sugerencia de que se suprimiera en la Ley Modelo la disposición sobre conflictos de leyes, se manifestó que, en un mundo ideal en que todos los Estados adoptaran la Ley Modelo, no serían necesarias normas sobre los conflictos de las leyes aplicables a las transferencias internacionales de crédito. Sin embargo, no podía esperarse esa perfección, y era preciso que las partes no tuvieran que litigar para saber qué norma sobre conflictos de leyes se aplicaba a sus transferencias. También se dijo que el hecho de que algunos Estados pudieran ser partes en una convención o un tratado bilateral o multilateral sobre conflictos de leyes que en cierta medida fuera aplicable a una transferencia de crédito no era una razón de más peso para no incluir disposiciones sobre la materia en la Ley Modelo que lo era la existencia de disposiciones nacionales de derecho sustantivo aplicables a las transferencias de crédito.

36. Se señaló que, en cualquier norma sobre conflictos de leyes, debían tenerse en cuenta las necesidades de ciertos Estados en los que el derecho sustantivo que regía las transferencias de crédito era la ley de sus partes constituyentes y no la del propio Estado.

37. Tras un debate, el Grupo de Trabajo decidió mantener una disposición basada en el párrafo 1 del proyecto de artículo 15.

38. Se sugirió que, en la disposición sobre conflictos de leyes, se indicara que las disposiciones sustantivas de la Ley Modelo aplicables a las relaciones entre el iniciador y su banco se regirían por la ley del banco del iniciador, pero que el resto de la transferencia de crédito se regiría por la ley del banco del beneficiario. Se señaló que la identidad y la ubicación del banco del beneficiario eran conocidas desde el comienzo de la transferencia de crédito y que las conocían todas las partes pertinentes.

39. En contra de la sugerencia, se manifestó que, si bien sería conveniente que la Ley Modelo se aplicara a la totalidad de una transferencia internacional de crédito, no era más factible que ese resultado se lograra mediante la inclusión en la Ley Modelo de una disposición sobre conflictos de leyes en relación con las transferencias electrónicas que lo sería mediante la elección de la ley por un sistema de transferencia de fondos, propuesta que ya había sido rechazada. La aplicación de la Ley Modelo a la totalidad de la transferencia de crédito sólo podría lograrse mediante su adopción por los distintos Estados interesados.

40. El Grupo de Trabajo decidió que el párrafo 1 del proyecto de artículo 15 siguiera estando redactado de modo que se aplicara a las distintas etapas de la transferencia.

41. Hubo acuerdo general en que las partes en la transferencia de crédito, o en cualquier etapa de ella, debían tener libertad para elegir la ley aplicable a sus relaciones. Se señaló que esa no sólo era la norma general respecto a los conflictos de leyes, sino que también figuraba expresamente en la Convención de Roma (véase el párrafo 33 *supra*). Se dijo que la inclusión de una norma de ese tipo

en el párrafo 1 del proyecto de artículo 15 reduciría la posibilidad de conflicto entre la Ley Modelo y la Convención, reduciendo así la dificultad de que las partes en esa Convención adoptaran la Ley Modelo.

42. Hubo un debate sobre si en la Ley Modelo debía establecerse algún límite a la libertad de las partes para elegir la ley aplicable a sus relaciones. Se señaló que la disposición, tal como estaba redactada actualmente, limitaba la elección de las partes a la ley del Estado del expedidor, la del Estado del receptor o la del Estado en cuya moneda se expresaran las órdenes de pago.

43. Según una opinión, la Ley Modelo debía contener el requisito de que existiera algún vínculo razonable entre la ley elegida por las partes y la operación de transferencia de crédito. A ese respecto, se sugirió que, además de las tres posibilidades actualmente existentes, podría incluirse la ley del Estado de un sistema de transferencia de fondos por el que pasara la transferencia de crédito. También se expresó la preocupación de que la libertad de elección de las partes se limitara por consideraciones de orden público. Se manifestó que la elección por las partes de alguna ley no pertinente no debía permitirles evitar la aplicación de cualquiera de las disposiciones obligatorias de la Ley Modelo, por ejemplo, respecto de la garantía de reembolso que figuraba en el inciso *b*) del artículo 11.

44. Según otra opinión, en la Ley Modelo debía reconocerse la libertad absoluta de las partes para elegir el derecho aplicable. Se manifestó que sería contrario a los principios generales de derecho internacional privado sobre la autonomía de las partes crear normas obligatorias que las partes no pudieran eludir eligiendo otra ley. Se manifestó que tales normas obligatorias serían sumamente excepcionales en el derecho internacional privado y diferentes de las normas de derecho público existentes en las legislaciones nacionales.

45. El Grupo de Trabajo decidió que el párrafo 1 del proyecto de artículo 15 contuviera la norma general de que, salvo cuando se dispusiera lo contrario en la Ley Modelo, las partes tuvieran libertad para elegir la ley aplicable.

46. El Grupo de Trabajo consideró después la cuestión de la ley que sería aplicable a una etapa de la transferencia de crédito cuando las partes no hubieran ejercido su derecho a elegir la ley aplicable. Según una opinión, la norma característica en el proceso de transferencia era la del expedidor. Según otra opinión, la norma característica era la del banco receptor, que tenía la obligación de verificar el origen de la orden de pago, de aceptarla o de notificar su rechazo y, si el banco la aceptaba, emitir una nueva orden de pago que concordara con la recibida. Según esa opinión, el derecho apropiado para su aplicación a esa etapa sería la ley del banco receptor. Se manifestó que la única excepción a esa norma que existía en el texto actual de la Ley Modelo se hallaba en el párrafo 1 del proyecto de artículo 4, relativo a la facultad del verdadero expedidor de obligar al supuesto expedidor. Sin embargo, hubo acuerdo general en que no había que tratar de establecer en la Ley Modelo qué derecho sería aplicable a la cuestión de si el verdadero expedidor de una orden de pago estaba facultado para obligar al supuesto expedidor.

47. Tras un debate, el Grupo de Trabajo decidió que, a menos que se hubiera acordado lo contrario, se aplicara a esa etapa de la transferencia la ley del banco receptor y que, en el párrafo 1 del proyecto de artículo 15, se estableciera claramente que no se aplicaba al derecho aplicable a la facultad del verdadero expedidor de obligar al supuesto expedidor.

Párrafo 2

48. En vista de que se habían suprimido en el proyecto de artículo 14 las normas primarias sobre el efecto de una transferencia de crédito en el cumplimiento de una obligación monetaria (véanse los párrafos 15 a 17 *supra*), se expresó la opinión de que debía suprimirse también el párrafo 2. En todo caso, se afirmó, no se establecían en él las normas apropiadas. Sin embargo, el Grupo de Trabajo decidió que, como se había mantenido una norma sobre el momento en que se cumpliría una obligación mediante una transferencia de crédito, debía mantenerse provisionalmente el párrafo 2.

Corchetes

49. Al finalizar el debate, el Grupo de Trabajo decidió que todo el texto del proyecto de artículo 15 se colocara entre corchetes en espera de su examen final en otro período de sesiones.

Artículo 16

50. En el documento A/CN.9/WG.IV/WP.47 se presentó un proyecto de nuevo artículo 16. El texto del primer párrafo del proyecto de nuevo artículo era el siguiente:

“Sin perjuicio de otras disposiciones de la presente Ley, los derechos y obligaciones de las partes en una transferencia de crédito pueden modificarse mediante el acuerdo de la parte afectada.”

El proyecto de nuevo artículo disponía en su segundo párrafo que la norma adoptada en un sistema de transferencia de fondos podía ser eficaz entre los bancos participantes “incluso si está en conflicto con la presente Ley y afecta indirectamente a otra parte en la transferencia de fondos que no da su consentimiento a la norma”.

51. Considerando que los proyectos de enmienda correspondientes del artículo 15 no habían sido aceptados por el Grupo de Trabajo, sus patrocinadores retiraron toda la propuesta. El Grupo de Trabajo observó que en su 18.º período de sesiones había decidido que la medida en que la Ley Modelo estaría sujeta al acuerdo de las partes se examinaría en relación con cada una de las disposiciones (A/CN.9/318, párr. 34). El Grupo de Trabajo observó además que el proyecto que tenía ante sí mencionaba el efecto de las normas contractuales en diversas disposiciones.

52. Posteriormente el Grupo de Trabajo decidió aprobar el primer párrafo del proyecto de artículo 16 y revisar cada uno de los artículos sustantivos para determinar si las declaraciones anteriores en cuanto a la eficacia de un acuerdo debían conservarse o podían suprimirse.

Revisión del texto: observaciones generales

53. Se sugirió que las cuestiones jurídicas derivadas del uso de las redes de comunicación debían ser objeto de la Ley Modelo y que todas las disposiciones de ésta debían revisarse con miras a su compatibilidad con el funcionamiento de sistemas de redes. Si bien hubo acuerdo en general en cuanto a que la Ley Modelo debía tener en cuenta el uso de redes, el Grupo de Trabajo recordó que en su 19.º período de sesiones había decidido esperar el estudio que al respecto realizaría el Banco de Pagos Internacionales (A/CN.9/328, párr. 65) y que el estudio todavía no estaba disponible. El Grupo de Trabajo observó que tal vez tendría que llevar adelante la preparación de disposiciones acerca de las redes sin contar con ese estudio si no estaba disponible pronto.

54. Se planteó la cuestión de si el texto de la Ley Modelo debía tomar en cuenta la reglamentación de control de cambios que existía en algunos países. El Grupo de Trabajo concordó en que esa cuestión debía mantenerse fuera del ámbito de la Ley Modelo, aunque los legisladores nacionales tal vez tendrían que considerar ese tipo de materias al adoptar la Ley Modelo. Se sugirió también que podría examinarse el efecto de las reglamentaciones de control de cambios en un comentario que podría prepararse posteriormente acerca de la Ley Modelo una vez que la Comisión la hubiera aprobado.

55. Se opinó que la Ley Modelo no debía orientarse en forma demasiado favorable a los intereses de los bancos. Por el contrario, se expresó el parecer de que la Ley Modelo debía ser neutral al tratar lo relativo a todas las partes comerciales, en lugar de centrarse en una de ellas, es decir, los bancos, como problema. Se dijo que en algunos Estados los usuarios comerciales de los sistemas de transferencia electrónica de créditos habían expresado una clara preferencia por un menor grado de protección a cambio de menores gastos o comisiones.

56. Se afirmó que podría considerarse que la orientación general de la Ley Modelo iba contra las necesidades de los sistemas de transferencia de fondos por cable para cantidades elevadas, a alta velocidad y con bajo costo. Se afirmó también que la CNUDMI debía centrarse en la tarea de facilitar el comercio internacional. Se expresó la preocupación de que la Ley Modelo pudiera resultar en un mayor engorro para el comercio. Otro parecer fue el de que la garantía de la restitución del dinero prevista en el inciso b) del artículo 11 debía considerarse en la misma perspectiva.

*Artículo 1**Párrafo 1*

57. Tuvo mucho apoyo la propuesta de que el alcance de la Ley Modelo fuera lo más amplio posible.

Carácter internacional

58. Hubo acuerdo general en que el texto del párrafo como había sido modificado por el grupo de redacción en el 20.º período de sesiones no reflejaba el resultado de las

decisiones adoptadas por el Grupo de Trabajo (A/CN.9/329, párr. 194). El Grupo de Trabajo decidió que los nuevos debates se basaran en el texto que había aprobado en su 20.º período de sesiones (A/CN.9/329, párr. 23). Ese texto era el siguiente:

“La presente Ley será aplicable a las transferencias de crédito cuando el banco del iniciador y el banco del beneficiario estén situados en Estados diferentes o, si el iniciador es un banco, ese banco y el banco del beneficiario estén situados en Estados diferentes.”

59. Se expresó el parecer de que el criterio de internacionalidad era contrario al funcionamiento de los sistemas de transferencia de fondos por cable para cantidades elevadas, a alta velocidad y de bajo costo. Una sugerencia fue que la Ley Modelo se aplicara a la situación en que, aunque el banco del iniciador y el banco del beneficiario estuvieran ubicados en el mismo país, se hiciera la transferencia en divisas.

60. Se sugirió también que el carácter de internacionalidad aprobado en el 20.º período de sesiones era insatisfactorio por cuanto a) había una distinción aparentemente arbitraria entre iniciadores que eran bancos e iniciadores que no lo eran, y b) a menos que se incluyera información acerca del iniciador en una orden de pago, probablemente no sería posible decir si la orden de pago estaba amparada por la Ley Modelo o no. A fin de superar esos problemas se sugirió el texto siguiente:

“La presente Ley será aplicable a las transferencias de crédito en que el primer banco expedidor en dar una orden de pago y el banco del beneficiario estén situados en Estados diferentes.”

61. Según otra propuesta la prueba del carácter internacional de una transferencia de crédito debía ser que atravesara una frontera. En consecuencia, se indicó que debía adoptarse la redacción siguiente:

“La presente Ley será aplicable si alguna orden de pago en que esté comprendida la transferencia de crédito se envía de un expedidor situado en un Estado a un banco receptor situado en otro Estado.”

62. En oposición a la propuesta se dijo que, cuando la transferencia a otro banco del mismo país se hacía en una divisa y había compensación respecto de esa divisa en el país en que tenía lugar la transferencia, el iniciador no podría prever, en el momento en que se iniciara la transferencia de crédito, si había de enviarse la transferencia al país de la divisa o si debía mantenerse dentro de su país. En consecuencia, no sería posible prever si la transferencia estaría sujeta a la Ley Modelo. Se respondió que siempre sería posible que el iniciador especificara a su banco cuál debía ser la ruta que debía darse a la transferencia de crédito.

63. Otra objeción a la propuesta fue que crearía cierto grado de incertidumbre por cuanto se refería al lugar en que se hallaba el expedidor. La ubicación podía interpretarse ya sea como el domicilio permanente del expedidor o, en el caso de una persona natural, todas las posibles residencias a las que podía mudarse. Como solución de esa dificultad se sugirió que sólo se considerara el lugar en que se hallaran los bancos y no el de sus clientes.

64. Tras el debate se aprobó el texto siguiente:

“La presente Ley se aplicará a las transferencias de crédito cuando el banco expedidor y su banco receptor estén en Estados diferentes.”

Consumidores

65. Se sugirió que se suprimiera la llamada del artículo 1, que indicaba que “lo dispuesto en la presente Ley Modelo se entenderá sin perjuicio de la legislación que se refiera a los derechos y obligaciones de los consumidores”. Se dijo que la Ley Modelo se limitaba a cuestiones de derecho mercantil, por lo cual no debía afectar la situación de los consumidores ni debía entenderse supeditada a la legislación relativa a los consumidores. Se respondió que la llamada tenía un propósito educacional, ya que la Ley Modelo sería aplicable a todos los clientes de bancos. Tras un debate el Grupo de Trabajo decidió que se redactara nuevamente la llamada de manera de señalar que la Ley Modelo no tenía el propósito de ocuparse de cuestiones relativas a la protección de los consumidores. Se remitió el asunto al grupo de redacción.

Artículo 2

Definición de “banco”, inciso f)

66. Se señaló que la definición de la palabra “banco” tenía especial importancia en la Ley Modelo porque era uno de los elementos para determinar el ámbito de aplicación de la ley. El Grupo de Trabajo decidió que la definición debía excluir las compañías portadoras de telecomunicaciones y otras entidades similares que transmitían órdenes de pago pero no desempeñaban un servicio de transferencia de crédito. Hubo también acuerdo general, pese a existir todavía alguna oposición, en que se pretendía abarcar las entidades que realizan un servicio de transferencia de crédito, incluso aunque no estén definidas como bancos con arreglo a la legislación de su país. Se señaló que la Ley Modelo no era un estatuto regulatorio limitado a los bancos en el sentido tradicional.

67. Se hizo una propuesta de que se definiera “banco” de la siguiente manera:

“‘banco’ significa una entidad que, con arreglo a la Ley del Estado donde le está permitido actuar, está autorizada para crear, mantener y destruir fondos, como se define en la presente Ley.”

La propuesta no recibió apoyo.

68. Se sugirió que se suprimieran las palabras “y la transferencia de fondos a otras personas”, que estaban entre corchetes. Se dijo que esas palabras eran superfluas. En respuesta, se manifestó que esas palabras se habían añadido precisamente para aclarar que la definición de banco no abarcaba los sistemas de transmisión de mensajes. Por consiguiente, se decidió que se añadiera a la definición actual una segunda oración en la que se dijera expresamente que las entidades que simplemente transmitían órdenes de pago no eran bancos. El Grupo de Trabajo decidió suprimir las palabras colocadas entre corchetes.

69. Hubo un debate acerca de si la definición de banco debía abarcar solamente las entidades que ejecutaran órdenes de pago en el curso ordinario de sus negocios, o si debía abarcar también las entidades que sólo ocasionalmente se dedicaran a ejecutar órdenes de pago. No se aprobó la propuesta de que se ampliara la definición de banco a fin de abarcar aquellas entidades que sólo ocasionalmente ejecutaran órdenes de pago.

70. Al final del debate, se pidió a la Secretaría que volviera a considerar la posibilidad de emplear una palabra distinta de “banco”, y que informara al Grupo de Trabajo en su próximo período de sesiones. El Grupo de Trabajo reconoció que cualquier palabra elegida tendría que poder utilizarse en términos compuestos como “banco receptor”.

Definición de “sucursal”

71. Se expresó la opinión de que la Ley Modelo debía contener la definición de “sucursal” de un banco. La razón dada fue que, en algunas legislaciones nacionales, se definían las “sucursales” de un modo restrictivo que no abarcaría ciertas oficinas o agencias de un banco que pudiera pretenderse que fueran consideradas bancos separados con arreglo a la Ley Modelo. En consecuencia, se propuso que la característica importante de una “sucursal” con arreglo a la Ley Modelo debía ser que enviara y recibiera órdenes de pago. Se objetó a esa propuesta sobre la base de que enviar y recibir órdenes de pago eran actos que podían ser realizados por simples transmisores de mensajes. Aunque existía la opinión generalizada de que la definición de “sucursal” no era necesaria, se invitó a la delegación que había planteado la cuestión a que, si lo deseaba, preparara un proyecto de definición y lo presentara al Grupo de Trabajo, ya fuera en su actual período de sesiones o en el próximo.

Definición de “transferencia de crédito”, inciso a)

72. Teniendo en cuenta la disposición recientemente aprobada sobre la conclusión de la transferencia de crédito en el párrafo 1 del artículo 14 (véase el párrafo 16 *supra*), el Grupo de Trabajo decidió suprimir las palabras colocadas entre corchetes en el inciso a) del artículo 2, en las que se indicaba cuándo concluye una transferencia de crédito.

Definición de “orden de pago”, inciso b)

73. Se convino en general en que debía suprimirse de la Ley Modelo toda referencia a las órdenes de pago condicionales. También se convino en que, a fin de facilitar las transferencias de crédito a alta velocidad, en la Ley Modelo debía decirse expresamente que se aplicaba sólo a las órdenes de pago incondicionales. El Grupo de Trabajo tomó nota de que tal disposición estaría sujeta al acuerdo en contrario de las partes. Tras el debate, el Grupo de Trabajo decidió que se suprimiera el apartado i). La primera parte del inciso b) fue modificada como sigue:

“Por ‘orden de pago’ se entiende la instrucción incondicional dada por un expedidor a un banco receptor de poner a disposición de una persona indicada una suma fija o determinada de dinero si: . . .”

74. Hubo un debate acerca de la condición jurídica de las partes cuando un cliente presentara a un banco una orden de pago condicional. Se señaló que, en tal caso, el contrato entre el expedidor de la orden de pago condicional y el banco receptor no estaría incluido en el ámbito de aplicación de la Ley Modelo. En caso de que se cumpliera la condición, se esperaría que el banco ejecutara la orden de pago condicional mediante la emisión de su propia orden de pago incondicional. Esa orden de pago y la transferencia de crédito resultante, si la transferencia era internacional, estarían incluidas plenamente en el ámbito de aplicación de la Ley Modelo. La consecuencia sería que, con arreglo a la Ley Modelo, se consideraría que el banco era el iniciador de la orden de pago, en lugar del banco del iniciador. El cliente que envió la orden de pago condicional no existiría con arreglo a la Ley Modelo. Por consiguiente, si la transferencia de crédito no se efectuara correctamente por razones no relacionadas con la condición original, cualquier derecho que el cliente pudiera tener derivaría de normas jurídicas ajenas a la Ley Modelo.

75. El Grupo de Trabajo convino en que este resultado no era conveniente, y decidió que se incluyera en la Ley Modelo una disposición con arreglo a la cual el expedidor de la orden de pago condicional tendría los derechos del iniciador de la transferencia de crédito con arreglo a la Ley Modelo cuando la ejecución de la orden de pago condicional diera eventualmente como resultado una transferencia de crédito incondicional. Se convino también en que la condición, así como su cumplimiento o incumplimiento, quedarían fuera del ámbito de aplicación de la Ley Modelo.

76. Se sugirió que se suprimiera el apartado ii) por la razón de que debía dejarse que la cuestión del reembolso del banco receptor fuera decidida de modo contractual entre el iniciador y su banco. Tras un debate, el Grupo de Trabajo convino en que el apartado ii) era necesario para excluir las transferencias de débito del ámbito de aplicación de la Ley Modelo.

77. La propuesta de que se suprimiera el apartado iii) no recibió apoyo alguno. Otra propuesta fue que ese apartado fuera reemplazado por el siguiente texto:

“La orden de pago ha de transmitirse al banco receptor directamente [, utilizando o no un sistema de comunicación establecido entre bancos.] o indirectamente, utilizando un sistema de transferencia de fondos establecido entre bancos.”

78. Otra propuesta fue que las palabras “la instrucción ha de transmitirse” del texto existente fueran reemplazadas por las palabras “la instrucción se transmite”. El Grupo de Trabajo decidió que las dos propuestas se remitieran al grupo de redacción.

79. En vista de la supresión del apartado i), el Grupo de Trabajo decidió suprimir el apartado iv).

Definición de “ejecución”

80. Se propuso que se añadiera a la Ley Modelo una definición de la “ejecución” de la orden de pago. Se dijo que esa definición sería útil para la interpretación

de los párrafos 1 y 2 del artículo 9. La propuesta no recibió el apoyo suficiente para justificar una modificación del texto.

Definición de “autenticación”, inciso j)

81. Se señaló que algunos métodos de autenticación del origen de una orden de pago requerían la verificación del contenido de la orden de pago. Se sugirió que ese hecho se reconociera en la definición de autenticación. Sin embargo, el Grupo de Trabajo decidió examinar las cuestiones relacionadas con la verificación de que el contenido de una orden de pago recibida era el mismo que el de la orden de pago enviada en su debate sobre el artículo 4 (véase el párrafo 102 *infra*).

Definición de “fecha de pago”, inciso l)

82. Se señaló que los mensajes de pago de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) no contenían ya un espacio para que se indicara una fecha de pago, y se afirmó que la Organización de Normalización Industrial (ISO) suprimiría toda referencia a una fecha de pago en la próxima revisión de sus normas. Se dijo que la fecha que normalmente se utilizaba en las órdenes de pago era la fecha del valor, es decir, la fecha en que los fondos debían ponerse a disposición del banco receptor.

83. Se sugirió que podía hacerse que el término fecha de ejecución cumpliera la pretendida función de la fecha de pago, siempre que el expedidor no pudiera estipular una fecha anterior a la fecha en que su banco receptor recibiera la orden de pago. La sugerencia no fue aceptada. Se manifestó que, aunque las órdenes de pago utilizadas en la práctica interbancaria no permitieran la designación de una fecha de pago, en la orden de pago original, enviada por el iniciador a su banco, podía estipularse que los fondos se pagaran al beneficiario en una fecha determinada. Se propuso que en inglés el concepto de “*pay date*” fuera reemplazado por el de “*payment date*”. Se sugirió la siguiente redacción:

“Por ‘fecha de pago’ se entiende la fecha indicada en la orden de pago en la que los fondos deben ponerse a disposición del beneficiario.”

84. El Grupo de Trabajo decidió que la cuestión volviera a examinarse conjuntamente con los artículos 9 y 12. Entretanto, decidió aceptar como redacción provisional la propuesta anteriormente mencionada.

Artículo 3

85. El Grupo de Trabajo tomó nota de que en su 20.º período de sesiones había decidido suprimir el anterior artículo 3. También tomó nota de que en ese período de sesiones había decidido abordar en alguna otra disposición la necesidad de una mención en las órdenes de pago que revelase a los bancos receptores que la orden de pago formaba parte de una transferencia internacional de crédito (A/CN.9/329, párr. 93). El Grupo decidió volver a examinar ese problema en otra ocasión.

Artículo 4

Párrafo 2

86. El Grupo de Trabajo tomó nota de que podía interpretarse que la parte introductoria del párrafo 2 significaba que el párrafo 2 se aplicaría a una orden de pago aunque el expedidor quedara obligado en virtud del párrafo 1. Por consiguiente, decidió redactar de nuevo la parte introductoria como sigue:

“Cuando una orden de pago está sujeta a autenticación, el supuesto expedidor de esa orden que no esté obligado en virtud del párrafo 1 quedará, no obstante, obligado si:”

87. El Grupo de Trabajo debatió si debía retenerse el inciso *b*). En apoyo de su supresión, se dijo que no era posible aplicar el inciso *b*) desde el punto de vista de las operaciones de un banco porque el banco normalmente no podía saber, en el momento en que recibía una orden de pago, si la orden estaba cubierta por un saldo acreedor disponible. Sólo podría saberlo si todos los débitos y créditos se inscribieran en la cuenta directamente en el momento de producirse. Sin embargo, incluso en los bancos más automatizados, algunos tipos de órdenes de pagos se procesaban en bloque, lo que daba como resultado que los débitos y créditos se inscribieran en las cuentas periódicamente, y a menudo al final de la jornada laboral. Además, se afirmó que el inciso *b*) produciría un resultado injusto, ya que el supuesto expedidor de una orden de pago no autorizada pero autenticada quedaría obligado por la orden si hubiera un saldo acreedor disponible suficiente en el momento de aceptar la orden de pago, pero no quedaría obligado si el saldo fuera insuficiente en ese momento.

88. En respuesta, se dijo que el inciso *b*) era una norma de asignación de riesgos y no una norma operativa. La norma básica del párrafo 1, de que el supuesto expedidor sólo estará obligado por una orden de pago si ha sido emitida por él o por otra persona facultada para obligarlo, quedaba revocada por el párrafo 2, en el caso de una orden autenticada, sólo si se cumplían las condiciones que figuraban en el párrafo 2. Se dijo que el inciso *b*) constituía una condición importante, porque evitaría que ciertos expedidores quedaran obligados por órdenes de pago no autorizadas.

89. Se sugirió que se establecieran normas separadas que no incluyeran el inciso *b*) para las transferencias electrónicas a alta velocidad, en tanto que las normas para las demás transferencias de crédito podrían incluir ese inciso. En contra de esa sugerencia, se manifestó que las transferencias a alta velocidad eran precisamente las transferencias en que el saldo existente en la cuenta del expedidor podía verificarse más fácilmente, ya que la tecnología permitía controlar directamente en tiempo real las cuentas utilizadas para esas transferencias. En contra se expresó la opinión de que ese control no se compadecía con la práctica bancaria internacional vigente.

90. Otra sugerencia fue que el inciso *b*) se aplicara cuando el expedidor no fuera un banco, pero que no se aplicara cuando el expedidor fuera un banco. En apoyo de ella, se dijo que la limitación de la responsabilidad del supuesto

expedidor en relación con una orden de pago no autorizada tenía mayor importancia para los iniciadores no bancarios.

91. Durante su examen del párrafo 2, el Grupo de Trabajo decidió limitar la aplicación del inciso *b*) a los expedidores no bancarios. Posteriormente, al examinar el párrafo 3, decidió suprimir enteramente el inciso *b*) (véase el párrafo 101 *infra*).

92. El Grupo de Trabajo tomó nota de que los incisos *a*) y *c*) eran condiciones acumulativas para la aplicación del párrafo 2, y decidió unirlos mediante la palabra “y”.

93. El Grupo de Trabajo tomó nota de que en su 18.º período de sesiones había decidido que un expedidor y un banco receptor no podían convenir en un procedimiento de autenticación que no fuera razonable desde el punto de vista comercial en el contexto del párrafo 2, pero que no había incluido una disposición en tal sentido en el texto de la Ley Modelo. También tomó nota de que en el actual período de sesiones había aprobado un nuevo artículo 16 en el que se expresaba el principio general de la libertad de contratar, a menos que se dispusiera lo contrario en la Ley Modelo, y había decidido revisar cada uno de los artículos sustantivos a fin de determinar si las disposiciones anteriores respecto a los efectos de un acuerdo debían mantenerse.

94. Según una opinión, había que confirmar la decisión anterior e incorporarla al texto de la Ley Modelo. Se afirmó que, como el banco receptor determinaría el tipo de autenticación que estaba dispuesto a recibir del expedidor, ese banco debía tener la obligación de asegurarse de que el procedimiento de autenticación fuera al menos razonable desde el punto de vista comercial. Si el banco receptor estaba dispuesto a aceptar órdenes de pago aunque no hubiera una autenticación razonable desde el punto de vista comercial, debía aceptar el riesgo de que la orden de pago no hubiera sido autorizada con arreglo al párrafo 1.

95. Según otra opinión, la libertad de convenir que el expedidor quedara obligado por una orden de pago no autorizada, incluso aunque no hubiera habido una autenticación razonable desde el punto de vista comercial, debía constituir una aplicación del principio general de la autonomía de las partes, que el Grupo de Trabajo había aceptado anteriormente (véase el párrafo 52 *supra*). También se manifestó que, en caso de litigio, habría incertidumbre en cuanto a si el método de autenticación era razonable desde el punto de vista comercial hasta la decisión definitiva del tribunal, a menos que se permitiera a las partes determinar mediante acuerdo qué constituía un procedimiento razonable.

96. Tras un debate, el Grupo de Trabajo decidió incluir en el párrafo 2 una disposición en el sentido de que no se permitiría que las partes convinieran en el uso de un procedimiento de autenticación que no fuera razonable desde el punto de vista comercial.

Párrafo 3

97. Se propuso que se aprobara para el párrafo 3 el siguiente texto:

“3. Sin embargo, el supuesto expedidor no quedará obligado en virtud del párrafo 2 si demuestra que la orden de pago, tal como fue recibida por el banco receptor, resultó de actos de una persona que no es ni ha sido empleado del supuesto expedidor, a menos que el banco receptor pueda demostrar que la orden de pago resultó de actos de una persona que ha tenido acceso al procedimiento de autenticación por negligencia del supuesto expedidor.”

98. Los autores de la propuesta manifestaron también que, si se aprobaba esa propuesta, debía suprimirse el inciso *b*) del párrafo 2 (que en ese momento se aplicaba a los expedidores no bancarios).

99. En apoyo de la propuesta, se señaló que el párrafo 3 se ocupaba del caso relativamente raro de una orden de pago no autorizada que hubiera sido autenticada con arreglo al párrafo 2. En tal caso, el supuesto expedidor soportaría la pérdida a menos que pudiera demostrar que la orden de pago resultó de actos de una persona que no era ni había sido empleado del supuesto expedidor. A fin de cumplir ese requisito, no sería necesario demostrar quién había enviado la orden de pago; el hecho de que no había resultado de actos de un empleado actual o pasado del expedidor podía probarse por otros medios. Aunque el supuesto expedidor hubiera probado ese hecho, aún podría quedar obligado por la orden de pago si el banco receptor podía demostrar que la autenticación se había logrado por negligencia del supuesto expedidor.

100. Se sugirió que la norma general que había adoptado el Grupo de Trabajo en el artículo 16, en el sentido de que las disposiciones de la Ley Modelo podían modificarse por acuerdo, se limitara en el párrafo 3, a fin de que el acuerdo no pudiera perjudicar a los expedidores no bancarios. Otra sugerencia fue que no hubiera limitación alguna a la posibilidad de que el párrafo 3 fuera modificado por acuerdo, pero que el acuerdo no pudiera figurar en las condiciones generales del banco receptor; el acuerdo tendría que figurar en un contrato específico entre el supuesto expedidor y el banco receptor.

101. Tras un debate, fue aprobada la propuesta que figura en los párrafos 97 y 98 *supra*. Aunque varias delegaciones manifestaron su profundo desacuerdo, el Grupo de Trabajo decidió que no era preciso decir en ese párrafo en qué medida podía ser modificado por acuerdo. Las delegaciones que estuvieron en desacuerdo con esa decisión veían con preocupación que las amplias disposiciones que dejaban a las partes en libertad de modificar la disposición por contrato pudieran reducir considerablemente la probabilidad de que la Ley Modelo resultara aceptable para las legislaturas nacionales.

Errores

102. El Grupo de Trabajo tomó nota de que en su 20.º período de sesiones había dicho que, si lo que se pretendía con la Ley Modelo era descargar al expedidor de responsabilidad por el contenido erróneo de una orden de pago tal como se recibió, en razón de la existencia de un procedimiento acordado entre el expedidor y el banco receptor mediante el cual se detectaría el error o la alteración,

esa intención debía expresarse mediante otra disposición (A/CN.9/329, párr. 79). El Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que propusiera un texto que incorporara esa idea, a fin de examinarlo en su 22.º período de sesiones.

Párrafo 4

103. No se examinó este párrafo.

Artículo 12

Párrafo 1

104. Se señaló que el Grupo de Trabajo había decidido en su 20.º período de sesiones mantener el principio enunciado en el párrafo 1 pero poniéndolo entre corchetes en previsión de que su redacción fuera modificada sustancialmente. En el actual período de sesiones se decidió suprimir el párrafo porque la misma cuestión estaba incluida en el párrafo 2.

Párrafo 2

105. Se señaló que el párrafo 2 era una de las disposiciones más importantes de la Ley Modelo porque en él se establecía qué bancos eran responsables ante el iniciador o ante el expedidor por los daños que pudieran haber resultado por la falta de ejecución o por la ejecución incorrecta de la transferencia de crédito. También se señaló que en el párrafo 5 se establecían los tipos y la magnitud de los daños que podría ser necesario pagar al iniciador o a otro reclamante. No obstante, se reconoció que había una relación entre el tipo y la magnitud de los daños que se podía reclamar y las correspondientes normas para determinar el banco o los bancos responsables de esos daños ante el iniciador.

106. Se sugirió que el Grupo de Trabajo examinara el párrafo 2 en la forma que tenía en la nueva redacción del artículo 12 que había propuesto una delegación y que figuraba en la observación 28 al artículo 12 en el documento A/CN.9/WG.IV/WP.46. No obstante, el Grupo de Trabajo decidió que sería más conveniente debatir el texto original del artículo 12, incluso el párrafo 2, y usar la nueva redacción sugerida como fuente de ideas para mejorar el texto.

107. El debate se concentró en dos cuestiones: si el banco del iniciador debía ser responsable ante el iniciador cuando la falta de ejecución o la ejecución incorrecta de una orden de pago que era parte de la transferencia de crédito se debía a uno de los bancos intermediarios de la cadena de transmisión de la orden de pago desde el banco del iniciador y si el iniciador debía poder reclamar directamente al banco intermediario. Se señaló que en el párrafo 2 estaba prevista dicha responsabilidad y los medios para el cobro de banco a banco, hasta llegar al banco en que hubiera ocurrido el problema, de los daños que tendría que pagar al iniciador su banco.

108. En apoyo a la modificación del texto para que se dispusiera que un banco era responsable ante el iniciador o el expedidor solamente de sus propias faltas, se dijo que, en algunos países ello resultaría del principio general de derecho según el cual nadie debe responder por los actos de

terceros. Además, a menudo un banco de un iniciador no estaba en condiciones de decidir la vía que había de seguir una transferencia de crédito en su viaje hacia el banco del beneficiario en un país extranjero y ni siquiera de saber qué camino podía seguir la transferencia. Se afirmó que cuando el iniciador pedía a su banco que transfiriera fondos a un país extranjero debía estar consciente de la probabilidad de que fuera necesario utilizar bancos intermediarios independientes.

109. Además, en apoyo a la modificación del texto, se afirmó que se responsabilizaría ante el iniciador al banco del iniciador por los actos de bancos intermediarios o del banco del beneficiario en países extranjeros cuando dichos bancos actuaran en formas que constituyesen no ejecución o ejecución incorrecta de la orden de pago con arreglo a las normas de la Ley Modelo, aunque constituyeran ejecución correcta con arreglo a las normas del país de que se tratase. Se citó como ejemplo que, con arreglo al artículo 9 de la Ley Modelo, el banco receptor debía ejecutar la orden de pago en el día en que la recibiera (siempre que hubiese recibido el pago correspondiente) mientras que en el derecho y la práctica bancarios de algunos países se disponía sólo la ejecución al día siguiente. El banco del iniciador no sólo sería responsable ante el iniciador en dicha situación, sino que también estaría imposibilitado de cobrar al banco en ese país extranjero los daños que hubiese pagado al iniciador. Se afirmó que el resultado final sería que los bancos de los Estados que hubiesen aprobado la Ley Modelo dejarían de enviar órdenes de pago a bancos de los Estados cuya legislación o práctica bancaria no se ajustase a la Ley Modelo. También se afirmó que sería impropio que un Estado, por ejemplo un Estado que hubiese adoptado la Ley Modelo, tratara de imponer su legislación y prácticas bancarias a otros Estados.

110. No obstante, también se dijo que la interpretación dada al párrafo 2 no era correcta porque, con arreglo a la disposición del párrafo 1 del artículo 15 sobre selección de leyes, la rectitud de la actuación del banco receptor estaría determinada por las leyes del país del banco receptor. En la medida en que el plazo para que se acreditase la suma transferida se refería al abono a la cuenta del beneficiario, se había decidido que la transferencia de crédito estaba terminada cuando el banco del beneficiario aceptaba la orden de pago. En consecuencia, la cuestión del momento en que el banco del beneficiario debía acreditar la suma al beneficiario, no era pertinente al funcionamiento de la Ley Modelo.

111. En apoyo al mantenimiento de la norma incluida actualmente en el párrafo 2 en el sentido de que el iniciador pueda reclamar los daños directamente al banco en falta o a un banco anterior en la cadena, incluso el banco del iniciador, se dijo que el banco del iniciador proporcionaba a éste un servicio que dependía del establecimiento de relaciones de correspondencia con otros bancos. Si, como se había afirmado, era posible que el banco del iniciador no pudiese determinar y tal vez ni siquiera conocer la totalidad de la cadena que se usaría para el envío de la transferencia de crédito al banco del beneficiario, era aún más difícil para el iniciador determinar o conocer dicha ruta. Se afirmó que la responsabilidad del banco del iniciador era sólo primaria y que la responsabilidad definitiva la tenía el banco

intermediario que estuviese en falta. Además, se dijo que el procedimiento previsto en el párrafo 2 era bien conocido en otros tipos análogos de actividad económica, tal como el transporte internacional de mercancías, en que era común que participasen en un envío varios porteadores distintos. Con arreglo a algunas convenciones sobre el transporte internacional de mercancías, si bien no todas, la reclamación podía hacerse al porteador del contrato de origen o al porteador en cuyas manos hubiese ocurrido el daño. El procedimiento previsto en el párrafo 2, análogo al usado en esas convenciones, aliviaría los problemas de procedimiento para el iniciador puesto que no tendría que presentar una reclamación a un banco en un país extranjero con el cual no tenía relación de negocios. No obstante, proporcionaría al banco del iniciador un recurso contra su banco receptor, con el cual normalmente tendría una relación de negocios constante.

112. También se dijo que el artículo 12 constituía una solución de avenencia equilibrada. Se había limitado fuertemente la magnitud de los daños consecuentes que podría cobrar el iniciador pero se había ampliado la capacidad para cobrar otros tipos de daños. Se contestó que esta pretendida solución de avenencia descargaría sobre el banco del iniciador nuevos riesgos derivados de las transferencias internacionales de crédito. La supuesta avenencia iba en detrimento del banco del iniciador.

113. En cuanto al argumento de que los bancos de algunos países podrían no estar en condiciones de satisfacer las normas de actuación previstas en la Ley Modelo, se dijo que una de las funciones de la Ley Modelo debía ser el establecimiento de las normas necesarias para la eficacia de las transferencias internacionales de crédito a gran velocidad. Se dijo que los bancos receptores que no satisfacían esas normas se darían cuenta rápidamente de la conveniencia de satisfacerlas.

114. Tras un amplio debate, el Grupo de Trabajo tomó nota de que no se habían reconciliado las diferencias entre las opiniones contrarias. En consecuencia, decidió mantener el texto actual. Señaló que el mantenimiento del párrafo 2 no implicaba juicio alguno sobre los demás párrafos del artículo 12, especialmente el párrafo 5. El Grupo de Trabajo decidió luego que debía establecerse claramente que, en relación con los daños consecuentes, el iniciador o su expedidor podían hacer valer la responsabilidad del banco receptor que hubiese cometido el error causante de las pérdidas.

115. Después de debatir el significado de la segunda frase del párrafo 2, se convino en que, puesto que se había acordado mantener la primera frase, la segunda enunciaba la política correcta y era necesaria. No obstante, se observó que su significado no estaba establecido claramente y se pidió a la Secretaría que propusiera al Grupo de Trabajo en su próximo período de sesiones un texto revisado de más fácil comprensión. Se sugirió que la Secretaría preparase también una revisión de la primera frase.

Párrafo 3

116. El Grupo de Trabajo señaló que el párrafo 3 tenía una función técnica para aclarar que ningún banco posterior

al banco en el cual hubiese ocurrido el problema incurriría en responsabilidad por daños ante el iniciador. Se señaló que en el texto modificado propuesto en el documento de trabajo que el Grupo de Trabajo tendría que volver a examinar posteriormente había problemas de redacción y de fondo.

Párrafo 4

117. Se decidió que el inciso a) debía incluir una referencia a la falta de cumplimiento de una de las obligaciones establecidas en el artículo 8. Si bien se expresó preferencia por la primera de las dos fórmulas posibles que estaban entre corchetes, a saber, "la relación de cuenta bancaria", el Grupo de Trabajo decidió no ocuparse por el momento de detalles de redacción de ese tipo.

Párrafo 5

Inciso a)

118. El Grupo de Trabajo observó que el actual proyecto de Ley Modelo disponía que debían pagarse intereses al iniciador y al expedidor, pero que en su 19.º período de sesiones había decidido que en determinadas circunstancias el beneficiario podría reclamar intereses cuando el proceso de transferencia de créditos se hubiese retrasado a causa de la demora de uno de los bancos que intervenían en él. Sin embargo, no se aprobó ningún texto en cumplimiento de esa decisión. Se hizo notar asimismo que los intereses debían pagarse a causa de la demora y no a causa de la negligencia del banco. Cuando había habido demora, el banco había podido utilizar los fondos durante un período más prolongado que si no la hubiese habido y no debía aprovecharse del beneficio resultante de la demora. Se había decidido que en los casos en que se había completado la transferencia, pero tardíamente, era el beneficiario quien tendría derecho a reclamar directamente compensación por la pérdida de intereses, pues era la persona que había sido privada del uso de los fondos durante el período de la demora. El beneficiario era quien debía recibir los intereses, tuviese o no derecho, como ocurre con respecto del iniciador, a que la transferencia fuese completada en una determinada fecha. Se afirmó, no obstante, que cuando la transferencia de crédito no se había consumado y el iniciador tenía derecho a recuperar sus fondos conforme al inciso b) del artículo 11, debía igualmente poder reclamar los intereses.

119. Se observó que la forma típica en que los bancos se compensaban unos a otros por los intereses debidos consistía en ajustar la fecha en que se acreditaba la cuenta, de manera que ésta indicase la fecha en que el crédito debía haberse registrado. Mediante el cambio de la fecha del crédito, se pagarían automáticamente los intereses correspondientes al banco que recibía el crédito. Se indicó que, en la práctica, la demora en la ejecución de una orden de pago se debía casi siempre a que ésta se había ejecutado en forma incorrecta. Tan pronto como se señalase el error a la atención del banco, éste ejecutaría inmediatamente la orden en forma correcta por la cantidad original. Los ajustes por concepto de intereses se realizarían más tarde, por lo general mediante un ajuste de fechas, aunque ese método se utilizaba con menos frecuencia cuando la persona que recibía el ajuste no mantenía una cuenta en el banco. Se

advirtió que en los Estados Unidos existía un proyecto de disposición por la que se requeriría que el banco expedidor o receptor que hubiese recibido un ajuste de fechas, pero que no era la parte que en última instancia tenía derecho a los intereses, transfiriera los beneficios del ajuste de fechas al iniciador o beneficiario último en forma de intereses.

120. Se expresó que, aunque el pago de intereses al beneficiario sería por lo general compensación suficiente por la demora, podría no ser compensación adecuada cuando la demora en la ejecución de la transferencia de crédito hubiese sido motivo de que el iniciador incurriese en mora en el pago al beneficiario. En ese caso, el beneficiario, como acreedor de una obligación, podría tener derecho a que el iniciador, como deudor de la obligación, le pagara intereses por el pago atrasado a una tasa más alta que cualquier otra tasa que pudiera aplicarse a la relación interbancaria. Se indicó que en tales casos, el banco que había causado la demora tendría que pagar al beneficiario o al iniciador (si el iniciador había reembolsado al beneficiario) una cantidad adicional igual a los intereses debidos como resultado del pago atrasado, menos el monto ya pagado. A esto se respondió que esa cantidad adicional entraba en el ámbito de los daños indirectos y que debía tratarse en ese contexto en las disposiciones de la Ley Modelo.

121. Se sugirió que la Ley Modelo debía indicar la tasa de interés que debía pagarse cuando el banco se atrasase en la ejecución de una orden de pago. El Grupo de Trabajo reconoció que no sería posible determinar numéricamente una tasa apropiada ni indicar concretamente la forma en que había de determinarse la tasa. Sin embargo, se sugirió que la Ley Modelo dispusiera que los intereses se calcularan conforme a la tasa interbancaria en la moneda en que estuviese expresada la orden de pago. Se dijo que debido a los mercados abiertos de capitales que ahora existían, las tasas para una determinada moneda solían ser esencialmente las mismas en todo el mundo.

122. Se formularon otras sugerencias respecto de la tasa de interés que el beneficiario debía recibir. Se indicó que, si la cuenta de un beneficiario que no fuese un banco se ajustaba tomando la fecha en que el crédito debía haberse registrado, el monto efectivo de los intereses que le corresponderían dependería de que la cuenta tuviese un saldo deudor o acreedor durante ese período, puesto que la tasa aplicable a un saldo deudor era siempre superior a la tasa que el beneficiario recibiría si la cuenta tuviese saldo acreedor. Se sugirió que el beneficiario debía recibir la tasa corriente aplicable a un depósito a la vista. Se advirtió también que, con arreglo al proyecto de disposición de los Estados Unidos, el beneficiario recibiría la tasa interbancaria.

123. Tras debatir la cuestión, el Grupo de Trabajo decidió que dispondría solamente que debían pagarse intereses, sin indicar la forma en que éstos debían calcularse.

Inciso b)

124. Aunque había algunos partidarios de que se mantuviera el inciso a) condición de que los daños incluyeran las pérdidas cambiarias, el Grupo de Trabajo decidió

suprimirlo y considerar cualquier posible recuperación de esas pérdidas al examinar los daños indirectos.

Inciso c)

125. El Grupo de Trabajo consideró que las cuestiones planteadas en el inciso eran de importancia secundaria y que su examen debía dejarse para más adelante.

Inciso d)

126. El Grupo de Trabajo observó que anteriormente había decidido que, con respecto a los daños y perjuicios indirectos, sólo el banco receptor que había cometido el error que había causado esas pérdidas podía ser considerado responsable ante el iniciador o el expedidor (véase el párrafo 14 *supra*).

127. De conformidad con una opinión, el inciso *d)* debía suprimirse. Se dijo que una disposición sobre daños indirectos no armonizaría con el funcionamiento de los modernos sistemas de transferencias de fondos por cable. Se dijo que el banco receptor no podía prever en qué medida podía considerársele responsable por los daños y perjuicios indirectos. En consecuencia, no podría obtener una cobertura adecuada del seguro para hacer frente a la posibilidad de que se le considerara responsable. En cualquier caso, la posible responsabilidad por daños y perjuicios indirectos aumentaría sustancialmente el costo de las transferencias de créditos, costo que sería de cargo de todos los usuarios. Se sugirió que la Ley Modelo indicara que los bancos eran libres de pactar mediante contrato el aumento de su responsabilidad si así lo deseaban. Se observó que los bancos que ofrecían dos servicios diferentes con distintos niveles de responsabilidad cobrarían más por el nivel más elevado.

128. Según otra opinión, debía mantenerse el inciso *d)* del párrafo 5. Sería raro el caso en que un banco actuara con la intención de causar la ejecución incorrecta o la falta de ejecución de una orden de pago, o que actuara imprudentemente y a sabiendas de que como consecuencia de su conducta se produciría esa ejecución incorrecta o falta de ejecución. No obstante, si así ocurriera, sería injusto que el banco no fuera responsable de las consecuencias de sus actos. Se dijo que ese principio era tan fundamental en muchos sistemas jurídicos, que sería poco probable que se aprobara la Ley Modelo si ésta negara tal resultado.

129. Se criticó la redacción actual del inciso por considerarse que permitía que fuera demasiado fácil para cualquiera afirmar que un banco había actuado con intención maliciosa o con imprudencia. Se indicó que, particularmente si se trataba de un banco grande y extranjero, era probable que un jurado tendiera a considerar que la negligencia ordinaria del banco era conducta imprudente. Se formularon sugerencias que tenían por objeto dejar en claro que correspondía a la parte que afirmara que el banco había actuado en forma imprudente probar que dicha conducta había sido efectivamente imprudente. Sin embargo, se dijo que ninguna de las sugerencias formuladas lograban el resultado deseado.

130. Se propuso que se suprimieran tanto el inciso *d)* del párrafo 5 como el párrafo 8. Con arreglo a esa propuesta, la Ley Modelo no contemplaría el pago de daños y perjuicios

indirectos bajo ninguna circunstancia, pero nadie estaría impedido de basarse en otras doctrinas jurídicas que pudieran existir en el sistema jurídico pertinente para pedir el resarcimiento de esos daños. Se sugirió también que se combinara el inciso *d)* del párrafo 5 con el párrafo 8, con objeto de que los bancos quedaran sujetos a otras doctrinas jurídicas pertinentes cuando actuaran en la forma descrita en el texto actual del inciso *d)* del párrafo 5. En oposición a ambas sugerencias se señaló que el propósito del párrafo 8 era conservar la unidad de la ley con respecto a las transferencias internacionales de créditos, unidad que la Ley Modelo buscaba lograr. Se dijo también que uno de los objetivos del párrafo 8 era proteger al sistema bancario contra demandas imprevistas por cantidades considerables, sobre la base de doctrinas jurídicas ajenas a la Ley Modelo.

131. El Grupo de Trabajo convino en que necesitaría más tiempo para estudiar las consecuencias de las sugerencias que se habían formulado. Decidió que dejaría ambos textos entre corchetes y volvería a examinarlos en el próximo período de sesiones.

II. LABOR FUTURA

132. El Grupo de Trabajo hizo notar que celebraría su próximo período de sesiones en Viena, entre el 26 de noviembre y el 7 de diciembre de 1990. Hizo notar asimismo que la Comisión había pedido al Grupo de Trabajo que terminara su tarea de preparar un proyecto de Ley Modelo de manera que la Comisión pudiera examinarlo en su 23.º período de sesiones que se celebraría en Viena del 10 al 28 de junio de 1991.

ANEXO

Proyecto de Ley Modelo sobre transferencias internacionales de crédito con las modificaciones introducidas en el 21.º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Pagos Internacionales^a

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. *Ámbito de aplicación*^{*}

1. La presente ley será aplicable a una transferencia de crédito cuando el banco expedidor y el banco receptor estén situados en Estados diferentes.

^aLo dispuesto en la presente Ley Modelo se entenderá sin perjuicio de la legislación que se refiera a los derechos y obligaciones de los consumidores^b.

^bEn su 21.º período de sesiones el Grupo de Trabajo examinó los artículos 1 a 4, 12 y 14 a 16. Además de las modificaciones concretas del texto de esos artículos, el Grupo de Trabajo adoptó varias decisiones de que el texto debía modificarse, dejando para más tarde la redacción de un texto determinado. Todas esas decisiones están indicadas mediante una nota en que se da su ubicación en el informe. La Secretaría presentará en el documento A/CN.9/WG.IV/WP.49 proyectos de propuesta para dar cumplimiento a esas decisiones.

^cEl Grupo de Trabajo decidió que la nota de pie de página al artículo 1 debía redactarse de nuevo para que dijera que la Ley Modelo no se proponía ocuparse de cuestiones relacionadas con la protección de los consumidores (véase el párrafo 65).

2. A los efectos de determinar el ámbito de aplicación de la presente ley, las sucursales de bancos situadas en Estados diferentes se considerarán bancos distintos.

Artículo 2. Definiciones

A los fines de la presente ley:

a) Por "transferencia de crédito" se entiende la serie de operaciones que comienza con la orden de pago del iniciador, hecha con el propósito de poner fondos a disposición de una persona indicada. La expresión comprende toda orden de pago expedida por el banco del iniciador o cualquier banco intermediario destinada a cumplir la orden de pago del iniciador.

b) Por "orden de pago" se entiende la instrucción incondicional dada por un expedidor a un banco receptor de poner a disposición de una persona indicada una suma fija o determinable de dinero si:

- i) *Suprimido*
- ii) el banco receptor ha de ser reembolsado debitando una cuenta del expedidor, o recibiendo de otra manera el pago del expedidor,
- iii) la instrucción ha de transmitirse directamente al banco receptor o bien a un intermediario, un sistema de transferencia de fondos o un sistema de comunicación para que la transmita al banco receptor^d.

iv) *Suprimido*

c) Por "iniciador" se entiende el expedidor de la primera orden de pago en una transferencia de crédito.

d) Por "beneficiario" se entiende la persona indicada en la orden de pago del iniciador para recibir fondos como consecuencia de la transferencia de crédito.

e) Por "expedidor" se entiende la persona que emite una orden de pago, comprendidos el iniciador y cualquier banco expedidor.

f) Por "banco" se entiende una entidad que, en el curso ordinario de sus negocios, toma a su cargo la ejecución de órdenes de pago^e.

g) Por "banco receptor" se entiende el banco que recibe una orden de pago.

h) Por "banco intermediario" se entiende todo banco receptor, excepto el banco del iniciador y el banco del beneficiario.

i) Por "fondos" o "dinero" se entiende también el crédito anotado en la cuenta llevada por un banco, que comprende el

crédito expresado en una unidad monetaria de cuenta establecida por una institución intergubernamental o mediante acuerdo entre dos o más Estados, siempre que se pueda aplicar la presente ley sin perjuicio de la reglamentación de la mencionada institución intergubernamental o de las cláusulas del mencionado acuerdo.

j) Por "autenticación" se entiende un procedimiento, resultado de un acuerdo, por el que se determina si una orden de pago [o la revocación de una orden de pago] fue expedida total o parcialmente por el supuesto expedidor.

k) Por "fecha de ejecución" se entiende la fecha en que el banco receptor debe ejecutar la orden de pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.

l) Por "fecha de pago" se entiende la fecha indicada en la orden de pago en que los fondos se deben poner a disposición del beneficiario^f.

Artículo 3. *Suprimido*

CAPÍTULO II. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Artículo 4. *Obligaciones del expedidor*

1. El supuesto expedidor estará obligado por una orden de pago [o la revocación de una orden de pago] si hubiese sido emitida por él o por otra persona facultada para obligarlo.

2. Cuando una orden de pago esté sujeta a autenticación, el supuesto expedidor que no esté obligado conforme al párrafo 1 quedará no obstante obligado si:^g

a) la autenticación proporcionada constituye desde el punto de vista comercial un método razonable de protección contra las órdenes de pago no autorizadas, y

b) *Suprimido*

c) el banco receptor cumplió lo dispuesto en materia de autenticación.

3. Sin embargo, el supuesto expedidor no quedará obligado en virtud del párrafo 2 si demuestra que la orden de pago, tal como fue recibida por el banco receptor, resultó de actos de una persona que no es ni ha sido empleado del supuesto expedidor, a menos que el banco receptor pueda demostrar que la orden de pago resultó de actos de una persona que ha tenido acceso al procedimiento de autenticación por negligencia del supuesto expedidor^h.

4. El expedidor quedará obligado a pagar al banco receptor por la orden de pago cuando éste la acepte, pero, a menos que se acuerde otra cosa, el pago no deberá efectuarse hasta la fecha de ejecución.

^eEsta redacción se adoptó como borrador provisional (véase el párrafo 84).

^fEl Grupo de Trabajo decidió incluir en el párrafo 2 una disposición en el sentido de no permitir que las partes acordasen utilizar un procedimiento de autenticación que no fuera razonable desde el punto de vista comercial (véase el párrafo 96).

^gEl Grupo de Trabajo observó que en su 20.º período de sesiones había dicho que, si lo que se pretendía con la Ley Modelo era descargar al expedidor de la responsabilidad por el contenido erróneo de una orden de pago recibida en razón de la existencia de un procedimiento acordado entre el expedidor y el banco receptor mediante el cual se detectaría el error o la alteración, esa intención debía expresarse por separado (A/CN.9/329, párr. 79). El Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que propusiera un texto que pusiese por obra esta idea para examinarlo en su 22.º período de sesiones (véase el párrafo 102).

^dEl Grupo de Trabajo decidió que se incluyera en la Ley Modelo una disposición en el sentido de que el expedidor de una orden de pago condicional tendría los mismos derechos que el iniciador de una transferencia de crédito conforme a la Ley Modelo cuando la ejecución de la orden de pago condicional tuviera en definitiva como resultado una transferencia incondicional de crédito. Hubo también acuerdo en que la condición misma, así como el cumplimiento o el no cumplimiento de la condición, quedarían fuera del alcance de la Ley Modelo (véase el párrafo 75).

^eSe propuso reemplazar las palabras "la instrucción ha de transmitirse" por las palabras "la instrucción se transmite". Otra propuesta consistía en redactar de nuevo el inciso para que dijera: "la orden de pago ha de transmitirse al banco receptor directamente [, utilizando o no un sistema de comunicación convenido entre los bancos,] o indirectamente, utilizando un sistema de transferencia de fondos convenido entre los bancos". El Grupo de Trabajo remitió las propuestas al Grupo de Redacción (véanse los párrafos 77 y 78).

^fSe pidió a la Secretaría que reexaminara la posibilidad de utilizar una palabra distinta de "banco" (véase el párrafo 70). El Grupo de Trabajo convino también en que debían excluirse de la definición los transmisores de telecomunicaciones y otras entidades análogas que transmitían las órdenes de pago pero no prestaban un servicio de transferencia de crédito (véanse los párrafos 66 y 68).

Artículo 5. Aceptación o rechazo de una orden pago por un banco receptor que no sea el banco del beneficiario¹

1. Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable a todo banco receptor que no sea el banco del beneficiario.

2. Se considerará que un banco receptor ha aceptado la orden de pago del expedidor en el momento en que se dé cualquiera de los siguientes casos:

a) cuando haya transcurrido el plazo en el que debería haber notificado su rechazo sin haberse dado el aviso correspondiente, salvo que la aceptación no se producirá hasta que el banco receptor haya recibido el pago del expedidor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 4,

b) cuando el banco reciba la orden de pago, siempre que el expedidor y el banco hayan convenido en que el banco ejecutará todas las órdenes de pago recibidas del expedidor,

c) cuando el banco dé aviso al expedidor de su aceptación,

d) cuando el banco emita una orden de pago con el propósito de ejecutar la orden de pago recibida.

3. Si un banco receptor, que no sea el banco del beneficiario, no acepta la orden de pago del expedidor, como no sea en virtud del inciso a) del párrafo 2, deberá dar aviso de su rechazo a ese expedidor, a menos que no haya información suficiente para identificarlo. La notificación del rechazo de una orden de pago deberá cursarse a más tardar en la fecha de ejecución.

Artículo 6. Obligaciones de un banco receptor que no sea el banco del beneficiario

1. Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable a todo banco receptor que no sea el banco del beneficiario.

2. El banco receptor que acepte una orden de pago se obliga en virtud de esa orden a emitir, en el plazo fijado en el artículo 9, al banco del beneficiario o a un banco intermediario apropiado, una orden de pago que concuerde con el contenido de la orden de pago recibida por el banco receptor y que contenga las instrucciones necesarias para ejecutar de manera apropiada la transferencia de crédito.

3. Cuando se reciba una orden de pago de cuyo contenido se deduzca que está mal dirigida y que contenga datos suficientes para identificar al expedidor, el banco receptor deberá dar aviso de ese error de dirección en el plazo fijado por el artículo 9.

4. Cuando la instrucción no contenga datos suficientes para constituir una orden de pago o cuando, pese a constituir una orden de pago, los datos en la orden no sean suficientes para ejecutarla, pero se pueda identificar al expedidor, el banco receptor deberá, en el plazo fijado por el artículo 9, darle aviso de esa insuficiencia.

5. Si en una orden de pago hay discrepancia entre las palabras y las cifras que indican el importe, el banco receptor deberá, en el plazo fijado por el artículo 9, dar aviso de la discrepancia al expedidor, si éste puede ser identificado. El presente párrafo no se aplicará si el expedidor y el banco han acordado que el banco podrá actuar basándose bien sea en las palabras, bien sea en las cifras, según el caso.

¹El Grupo de Trabajo convino en que la Ley Modelo debía tener en cuenta el empleo de la compensación. Recordó que en su 19.º período de sesiones había decidido esperar el estudio sobre la materia prometido por el Banco de Pagos Internacionales (BPI) (A/CN.9/328, párr. 65). El Grupo de Trabajo hizo notar que tal vez tuviera que llevar adelante la preparación de disposiciones sobre compensación sin poder aprovecharse del estudio del BIP si no se podía disponer prontamente de él (véase el párrafo 53).

6. El banco receptor no estará obligado a atenerse a las instrucciones del expedidor que señalen un banco intermediario, un sistema de transferencia de fondos o un medio de transmisión determinados que deba ser utilizado para realizar la transferencia, cuando dicho banco determine, de buena fe, que no es posible atenerse a las instrucciones o que, de hacerlo, se provocaría un retraso o gastos excesivos en la ejecución de la transferencia de crédito. El banco receptor habrá respetado el plazo fijado en el artículo 9 si, dentro del plazo fijado en ese artículo, pregunta al expedidor las medidas que deberá tomar en vista de las circunstancias.

7. A los efectos del presente artículo, las sucursales de un banco son bancos distintos aunque estén situadas en el mismo Estado.

Artículo 7. Aceptación o rechazo por el banco del beneficiario¹

1. Se considerará que el banco del beneficiario ha aceptado la orden de pago en el momento en que se dé cualquiera de los siguientes casos:

a) cuando haya transcurrido el plazo en el que debería haber notificado su rechazo sin haberse dado el aviso correspondiente, salvo que la aceptación no se producirá hasta que el banco receptor haya recibido el pago del expedidor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 4,

b) cuando el banco reciba la orden de pago, siempre que el expedidor y el banco hayan convenido en que el banco ejecutará todas las órdenes de pago que reciba del expedidor,

c) cuando el banco dé aviso al expedidor de su aceptación,

d) cuando el banco acredite la cuenta del beneficiario o pague de otra manera al beneficiario,

e) cuando el banco dé aviso al beneficiario de que tiene derecho o a retirar los fondos o a disponer de la suma acreditada,

f) cuando el banco dé, de alguna otra manera, a la suma acreditada el destino indicado en las instrucciones impartidas en la orden de pago,

g) cuando el banco destine la suma acreditada al pago de una deuda que el beneficiario tenga con él o al cumplimiento de un mandamiento judicial.

2. El banco del beneficiario que no acepta una orden de pago del expedidor, como no sea en virtud del inciso a) del párrafo 1, deberá dar aviso de su rechazo al expedidor, a menos que la información sea insuficiente para identificarlo. El aviso del rechazo de una orden de pago deberá cursarse, a más tardar, en la fecha de ejecución.

Artículo 8. Obligaciones del banco del beneficiario

1. El banco del beneficiario quedará obligado, al aceptar la orden de pago recibida, a poner los fondos a disposición del beneficiario con arreglo a la orden de pago y a la ley aplicable a la relación existente entre el banco y el beneficiario.

2. Cuando se reciba una orden de pago de cuyo contenido se deduzca que está mal dirigida y que contenga datos suficientes para identificar al expedidor, el banco del beneficiario deberá dar aviso de ese error de dirección en el plazo fijado por el artículo 9.

3. Cuando la instrucción no contenga datos suficientes para constituir una orden de pago o cuando, pese a constituir una orden de pago, los datos en la orden no sean suficientes para ejecutarla, pero se pueda identificar al expedidor, el banco del beneficiario deberá, en el plazo fijado por el artículo 9, dar aviso al expedidor de esa insuficiencia.

¹Véase la nota de pie de página i al artículo 5 *supra*.

4. Si en una orden de pago hay discrepancia entre las palabras y las cifras que indican el importe, el banco del beneficiario deberá dar aviso de la discrepancia al expedidor, si éste puede ser identificado. El presente párrafo no se aplicará si el expedidor y el banco han acordado que el banco podrá actuar basándose bien sea en las palabras, bien sea en las cifras, según el caso.

5. En los casos en los que se haya indicado el beneficiario a la vez en palabras y en cifras y no sea posible identificar con razonable certeza al beneficiario previsto, el banco del beneficiario deberá, en el plazo fijado por el artículo 9, dar aviso a su expedidor y al banco del iniciador, si pueden ser identificados.

6. El banco del beneficiario deberá, en la fecha de ejecución, dar aviso al beneficiario que no mantiene ninguna cuenta en el banco de que éste tiene fondos a su disposición, si el banco tiene información suficiente para dar ese aviso.

Artículo 9. *Plazo de que dispone el banco receptor para ejecutar la orden de pago y dar avisos*

1. El banco receptor deberá ejecutar la orden de pago en el día en que la reciba, a no ser que

a) la orden especifique una fecha posterior, en cuyo caso la orden deberá ejecutarse en esa fecha, o

b) la orden contenga una especificación de la fecha de pago y esa fecha indique que una ejecución posterior sería apropiada para que el banco del beneficiario aceptase una orden de pago y pusiese los fondos a disposición del beneficiario en la fecha de pago.

2. Los avisos previstos en los párrafos 3, 4 ó 5 del artículo 6 o en los párrafos 2, 3, 4 ó 5 deberán cursarse en el día en que se reciba la orden de pago.

3. El banco receptor que reciba la orden de pago con posterioridad a la hora límite fijada por ese banco para ese tipo de orden estará facultado a considerar que la orden ha sido recibida en el primer día en que ese banco ejecute ese tipo de órdenes de pago.

4. Si el banco receptor debe adoptar medidas en una fecha en la que no esté abierto para la ejecución de ese tipo de órdenes de pago, el banco deberá adoptar esas medidas en la primera fecha en la que ejecute ese tipo de órdenes de pago.

5. A los efectos del presente artículo, las sucursales de un banco son bancos distintos, aunque estén situadas en el mismo Estado.

Artículo 10. *Revocación*

1. Una orden de revocación enviada a un banco receptor que no sea el banco del beneficiario será eficaz:

a) si la emite el expedidor de la orden de pago,

b) si se recibe con la suficiente antelación a la ejecución de la orden de pago para que el banco receptor pueda cancelar la ejecución, si es que actúa con toda la prontitud que el caso permita, y

c) si está autenticada de la misma manera que la orden de pago.

2. Una orden de revocación enviada al banco del beneficiario será eficaz:

a) si la emite el expedidor de la orden de pago,

b) si se recibe con la suficiente antelación a la aceptación de la orden de pago para que el banco del beneficiario pueda no aceptar la orden de pago, si es que actúa con toda la prontitud que el caso permita, y

c) si está autenticada de la misma manera que la orden de pago.

3. Pese a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, el expedidor y el banco receptor podrán acordar que las órdenes de pago enviadas por el expedidor al banco receptor sean irrevocables o que la orden de revocación sea eficaz únicamente cuando se reciba en alguna fecha anterior a la deducible de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2.

4. Cuando el banco receptor reciba una orden de revocación demasiado tarde para que sea eficaz con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1, el banco receptor deberá, con toda la prontitud que el caso permita, revocar la orden de pago expedida a su banco receptor, a menos que la orden de pago sea irrevocable con arreglo a un acuerdo del tipo previsto en el párrafo 3.

5. El expedidor que haya emitido una orden de revocación de una orden de pago, que no sea irrevocable con arreglo a un acuerdo del tipo previsto en el párrafo 3, no estará obligado a pagar al banco receptor por la orden de pago:

a) si la transferencia no se completa como resultado de la revocación, o

b) si, pese a la revocación, la transferencia se completa por no haber cumplido un banco receptor, inmediato o posterior, las obligaciones que le incumban en virtud de los párrafos 1, 2 ó 4.

6. Cuando el expedidor haya pagado al banco receptor una orden de pago revocada que, con arreglo al párrafo 5, no estaba obligado a pagar, el expedidor tendrá derecho a que se le reembolse el pago efectuado.

7. Cuando el iniciador no esté obligado, con arreglo al inciso b) del párrafo 5, a pagar la orden de pago, o cuando haya recibido un reembolso, en virtud del inciso b) del párrafo 5, o del 6, cualquier derecho que tenga ese iniciador para recuperar los fondos del beneficiario se tendrá por cedido al banco que no haya cumplido las obligaciones que le incumbían con arreglo a los párrafos 1, 2 ó 4.

8. Ni la muerte ni la quiebra, ni la incapacidad del expedidor o del iniciador afectará a la validez jurídica de una orden de pago que haya sido emitida con anterioridad al evento.

9. A los fines del presente artículo, la sucursal de un banco será considerada como un banco distinto, incluso si está situada en el mismo país.

CAPÍTULO III. CONSECUENCIAS DE LAS TRANSFERENCIAS FALLIDAS, ERRÓNEAS O TARDÍAS

Artículo 11. *[Asistencia y reembolso]*

El banco receptor, que no sea el banco del beneficiario, que acepte una orden de pago quedará obligado en virtud de esa orden de pago:

a) en caso de emitirse una orden de pago al banco del beneficiario por un importe inferior al importe que figure en la orden de pago emitida por el iniciador a su propio banco, a prestar asistencia al iniciador y a cada banco expedidor subsiguiente, y a solicitar la asistencia de su banco receptor, para obtener la emisión de una orden de pago al banco del beneficiario por la diferencia entre el importe pagado al banco del beneficiario y el importe indicado en la orden de pago emitida por el iniciador a su propio banco.

b) en caso de que no se haya expedido al banco del beneficiario o de que éste no acepte una orden de pago que concuerde con el contenido de la orden de pago emitida por el iniciador y que contenga las instrucciones necesarias para ejecutar la transferencia de una manera apropiada, a reembolsar a su expedidor los fondos que haya recibido de éste y ese banco receptor tendrá derecho al reintegro de los fondos que haya pagado a su banco receptor.

Artículo 12. Responsabilidad e indemnización

1. Suprimido

2. El banco del iniciador y cada banco intermediario que acepte la orden de pago responderá ante su expedidor y ante el iniciador, con arreglo al párrafo 5 del presente artículo, de las pérdidas ocasionadas por la falta de ejecución o por la ejecución incorrecta de la transferencia, a la luz de las instrucciones de la orden de pago del iniciador. Se considerará que la transferencia ha sido ejecutada correctamente cuando una orden de pago que concuerde con la orden de pago expedida por el iniciador sea aceptada por el banco del beneficiario dentro del plazo fijado en el artículo 9^t.

3. El banco intermediario no incurrirá en responsabilidad en virtud del párrafo 2 si la orden de pago recibida por el banco del beneficiario era concorde con la orden de pago recibida por el banco intermediario y éste le había dado curso dentro del plazo fijado por el artículo 9.

4. El banco del beneficiario responderá

a) ante el beneficiario, de la ejecución incorrecta o de la falta de ejecución de la orden de pago que haya aceptado en la medida prevista por la ley que rija la [relación de cuenta bancaria] [la relación entre el beneficiario y el banco], y¹

b) ante su expedidor y el iniciador, de las pérdidas ocasionadas por no haber puesto el banco los fondos a disposición del beneficiario en la fecha de pago o en la fecha de ejecución indicada en la orden, tal como se prescribe en el artículo 9.

5. Si el banco debe responder conforme a este artículo ante el iniciador o ante su expedidor, estará obligado a resarcirle por

a) la pérdida de intereses,

b) *Suprimido*

c) los gastos ocasionados por una nueva orden de pago [y por las costas razonables de la representación procesal]*,

[d) [cualquier otra pérdida] que tal vez ocurra como resultado, si la ejecución incorrecta [o tardía] o la falta de ejecución [resultaron de una acción u omisión del banco efectuada ya sea con la intención de que se produjera esa ejecución incorrecta [o tardía] o esa falta de ejecución, ya sea temerariamente y a sabiendas de que probablemente se produciría esa ejecución incorrecta [o tardía] o esa falta de ejecución].]

*Cabría examinar la posibilidad de conceder el reembolso de las costas razonables de la representación procesal aun cuando no fueren recuperables con arreglo al derecho procesal civil.

¹El Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara un proyecto revisado del párrafo para dejar en claro que, respecto de los daños indirectos de que habla en inciso d) del párrafo 5, únicamente el banco receptor que hubiera cometido el error que causó las pérdidas podía ser hecho responsable ante el iniciador o ante su expedidor (véanse los párrafos 114 y 115).

²El Grupo de Trabajo decidió que el inciso a) debía contener una referencia a la omisión de cumplir una de las obligaciones del artículo 8 (véase el párrafo 117).

6. Si, contrariamente al párrafo 2 del artículo 6 o al párrafo 1 del artículo 8, el banco receptor omite notificar al expedidor de que ha recibido una orden de pago por error en la dirección, y si la transferencia se demora, el banco receptor será responsable:

a) si hay fondos disponibles, del interés que devenguen esos fondos durante el plazo en que estén a disposición del banco receptor, o

b) si no hay fondos disponibles, del interés que devengue el importe de la orden de pago durante un plazo apropiado que no superará los 30 días.

7. Los bancos podrán modificar mediante acuerdo lo dispuesto en el presente artículo en la medida en que su acuerdo aumente o disminuya la responsabilidad del banco receptor ante otro banco y siempre que el acto u omisión no sean de los que se describen en el inciso d) del párrafo 5. Un banco podrá convenir en aumentar su responsabilidad ante un iniciador que no sea un banco pero no podrá reducir su responsabilidad frente a ese iniciador.

[8. Las acciones previstas en el presente artículo no estarán subordinadas a la existencia de una relación previa entre las partes, ya sea contractual o de otra índole. Estas acciones serán excluyentes y no podrá ejercerse ninguna otra fundada en alguna otra doctrina jurídica.]

Artículo 13. Exoneración de la responsabilidad

El banco receptor y cualquier banco ante el cual el banco receptor esté directa o indirectamente obligado de conformidad con el artículo 12 quedarán exonerados de responsabilidad por la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, si el banco prueba que esa falta de cumplimiento fue ocasionada por la decisión de un tribunal, la interrupción de los servicios de comunicaciones o desperfectos del equipo, la suspensión de pagos por parte de otro banco, guerra, circunstancias excepcionales u otras circunstancias que el banco no pudo razonablemente haber tenido en cuenta en el momento de la transferencia o si prueba que no pudo razonablemente haber evitado o superado el acontecimiento o sus consecuencias.

CAPÍTULO IV. EFECTOS DE LAS TRANSFERENCIAS SOBRE LA RELACIÓN SUBYACENTE

Artículo 14. Pago y cumplimiento de obligaciones monetarias; obligaciones del banco frente al titular de la cuenta^a

1. *Suprimido*

2. Si la finalidad de la transferencia era que el iniciador cumpliera una obligación ante el beneficiario que pueda cumplirse mediante una transferencia a la cuenta indicada por el iniciador, se considerará satisfecha la obligación en el momento en que el banco del beneficiario acepte la orden de pago y en la medida en que esa obligación sería satisfecha por el pago de la misma suma en efectivo.

2 bis. Se completará una transferencia de crédito en el momento en que el banco del beneficiario acepte la orden de pago. Cuando se complete la transferencia de crédito el banco del beneficiario quedará obligado respecto del beneficiario por la suma de la orden de pago aceptada por el banco.

^aEl Grupo de Trabajo decidió que debía cambiarse el título de modo que reflejara el nuevo contenido del artículo (véase el párrafo 23).

3. En caso de que uno o más de los bancos intermediarios hubieran deducido gastos del importe de la transferencia, la obligación se considerará cumplida por la suma de esos gastos más el importe de la orden de pago tal como fue recibida por el banco del beneficiario. Salvo disposición en contrario de las partes, el deudor estará obligado a reembolsar al acreedor el monto de dichos gastos*.

4. *Suprimido*

CAPÍTULO V. CONFLICTO DE LEYES

[Artículo 15. *Conflicto de leyes*

1. Las personas que tienen previsto enviar y recibir órdenes de pago podrán convenir en que sus derechos y obligaciones recíprocas resultantes de las órdenes de pago se regirán por la ley del Estado del expedidor, por la ley del Estado del receptor o por la ley del Estado en cuya moneda se expresen las órdenes de pago.

*El Grupo de Trabajo decidió que el párrafo 3 debía establecer que la transferencia de crédito concluía y el banco del iniciador había cumplido con su obligación ante el iniciador aun cuando la cuantía de la orden de pago aceptada por el banco del beneficiario fuera inferior a la cuantía de la orden emitida por el iniciador, debido a las comisiones que diversos bancos en la cadena de transferencia hubiesen deducido. También decidió que el párrafo 3 debía disponer que la conclusión de la transferencia no perjudicaría ningún derecho que el beneficiario pudiera tener conforme a otras normas aplicables de la ley para recuperar el saldo de la cuantía original de la transferencia del iniciador, pero que el párrafo no debía pretender determinar si el iniciador o el beneficiario era responsable en último término del pago de las comisiones de la transferencia (véase el párrafo 20).

A falta de acuerdo, los derechos y obligaciones resultantes de las órdenes de pago se regirán por la ley del Estado del banco receptor*.

2. Salvo acuerdo en contrario, la ley del Estado donde deba cumplirse la obligación regirá los derechos y obligaciones recíprocos del iniciador y el beneficiario de una transferencia de crédito. Pero, en caso de que una obligación entre las partes pueda cumplirse mediante una transferencia a una cuenta en cualquiera de varios Estados o en caso de que la transferencia no esté destinada al cumplimiento de una obligación, los derechos y obligaciones recíprocos del iniciador y el beneficiario se regirán por la ley del Estado donde se encuentre el banco del beneficiario*.]

Artículo 16.

Sin perjuicio de otras disposiciones de la presente Ley, los derechos y obligaciones de las partes en una transferencia de crédito podrán modificarse mediante el acuerdo de la parte afectada.

*El Grupo de Trabajo decidió conservar una disposición basada en el párrafo 1 del artículo 15 (véase el párrafo 38). Se decidió que el párrafo 1 del artículo 15 continuase redactado de manera que fuera aplicable a los diversos segmentos de la transferencia (véase el párrafo 40). Decidió que el párrafo 1 del artículo 15 contuviera una norma general de que, salvo lo dispuesto en la Ley Modelo, las partes eran libres de elegir la ley aplicable (véase el párrafo 45). Decidió que, a menos que se acordara otra cosa, la ley del banco receptor se aplicaría a ese segmento de la transferencia y que el párrafo 1 del artículo 15 debía dejar en claro que no se refería a la ley aplicable a la autorización del expedidor real de vincular al expedidor aparente (véase el párrafo 47).

*El Grupo de Trabajo decidió que, dado que se había conservado una regla sobre el momento en que una obligación sería satisfecha mediante una transferencia de crédito, debía conservarse provisionalmente el párrafo 2 (véase párr. 48).

D. Documentos de trabajo presentados al Grupo de Trabajo sobre Pagos Internacionales en su 21.º período de sesiones

1. Transferencias internacionales de crédito: observaciones al proyecto de Ley Modelo sobre transferencias internacionales de crédito: informe del Secretario General (A/CN.9/WG.IV/WP.46 y Corr.1) [Original: inglés]

ÍNDICE

	<i>Página</i>
INTRODUCCIÓN	172
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY MODELO SOBRE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE CRÉDITO	172
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES	173
Artículo 1. Ámbito de aplicación	173
Artículo 2. Definiciones	175
Artículo 3. Contenido de la orden de pago	179
CAPÍTULO II. OBLIGACIONES DE LAS PARTES	179
Artículo 4. Obligaciones del expedidor	179
Artículo 5. Aceptación o rechazo de una orden de pago por un banco receptor que no sea el banco del beneficiario	182
Artículo 6. Obligaciones de un banco receptor que no sea el banco del beneficiario	184